



Derechos Territoriales y Ambientales de las Mujeres en Jalisco

**Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres**

Subsecretaría de Igualdad de Género

Contenido

[Introducción 1](#_Toc37882555)

[Normativa de Derechos Territoriales y Ambientales en la igualdad 3](#_Toc37882556)

[Marco Internacional 3](#_Toc37882557)

[Legislación Nacional 22](#_Toc37882558)

[Legislación Estatal 27](#_Toc37882559)

[Diagnóstico 32](#_Toc37882560)

[Brechas de Género y/o indicadores de acceso a oportunidades 43](#_Toc37882561)

[Objetivos, estrategias e indicadores DE PROIGUALDAD 45](#_Toc37882562)

[ANEXO 0](#_Toc37882563)

[Aportaciones 3](#_Toc37882564)

[Comentarios 4](#_Toc37882565)

[Bibliografía 5](#_Toc37882566)

[ONUMUJERES. Gobernanza y planificación nacional. Recuperado en: 12](#_Toc37882567)

[https://www.unwomen.org/es/what-we-do/governance-and-national-planning 12](#_Toc37882568)

# Introducción

La labor de los Estados a favor de la igualdad de género se enmarca en el cuerpo jurídico elaborado por las Naciones Unidas en torno a los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales de las mujeres, abordados sobre todo, a partir de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, realizada en Beijing en 1995, en lo que respecta al planteamiento de que la construcción de la igualdad entre mujeres y hombres es una tarea que compromete a la sociedad en su conjunto y que, desde el punto de vista de las políticas públicas, debe formar parte de todas las políticas estatales y no solo de ciertas líneas de trabajo sectoriales.

Esta noción de igualdad entre mujeres y hombres como una responsabilidad del Estado se ha expresado a través de tres tipos de políticas:

1. de igualdad ante la ley,
2. de acción afirmativa y
3. de transversalización de género.

Si bien la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, en su calidad de Mecanismo para el Adelanto de las Mujeres, es la entidad responsable de coordinar la diversidad de medidas en todos los ámbitos de acción de los poderes locales del Estado, por ley corresponde a todos los entes públicos la tarea de transversalizar la Perspectiva de Género (PG) en sus respectivos instrumentos de planeación, operación y evaluación de política pública. Esto implica la participación activa de los distintos sectores y la definición por parte de éstos, de las prioridades y compromisos que adoptarán en cada uno de sus programas; algo que con frecuencia presenta diversas dificultades y resistencias, cuando en realidad se trata de una guía articuladora y orientadora del ejercicio público hacia las agendas de la igualdad.

Conviene tener muy claro que el objetivo es la igualdad y que la estrategia general para alcanzarla es la transversalización de la perspectiva de género, la cual requiere establecer de conceptos y herramientas que posibiliten avanzar hacia la igualdad sustantiva, a través de aplicar la perspectiva de género en las políticas públicas.

La transversalización de la PG tiene tres características básicas que conviene recordar: se trata de un proceso estratégico, sistémico y participativo.

La estrategia de transversalizar la PG adquiere un carácter multidimensional, ya que en todas sus fases pueden ser descubiertas las dimensiones: política, ideológica o doctrinaria, normativa, ética, conceptual, técnica y administrativa. Es necesario introducirla de manera contundente y progresivamente en la pluralidad de esferas de actuación donde las desigualdades se hacen presentes y a las cuales, es necesario deslegitimar y transformarlas en relaciones de igualdad: lo político, lo económico, lo social, lo cultural, lo material y lo simbólico, lo colectivo, lo interpersonal y en las subjetividades.

Este cuaderno temático de *Derechos Territoriales y Ambientales de las Mujeres en Jalisco* tiene el objetivo de concentrar información estratégica sobre el marco jurídico, objetivos, diagnóstico, brechas de desigualdad, estrategias y acciones institucionales que en la materia integran la política estatal de igualdad en Jalisco.

Lo anterior facilitará el trabajo en conjunto de la SISEMH con las dependencias y organismos que integran la Coordinación General Estratégica de Gestión del Territorio del Estado de Jalisco para dar seguimiento, monitoreo y en su caso acompañamiento en la implementación de los programas que propicien espacios más libres para la igualdad y autonomía de las mujeres jaliscienses.

# Normativa de Derechos Territoriales y Ambientales en la igualdad

## Marco Internacional

|  |  |
| --- | --- |
| **Instrumento** | **Compromisos** |
| Convención para la Eliminación de toda forma de Discriminación hacia la Mujer (CEDAW) | La CEDAW es el instrumento jurídico internacional vinculante más amplio sobre los derechos humanos de las mujeres y niñas. Fue adoptada en forma unánime por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1979 y es el segundo instrumento más ratificado por los Estados Miembros de la ONU. Su cumplimiento es obligatorio.  El Estado mexicano ratificó la CEDAW en 1981. En 2018 presentó en Ginebra su 9º Informe.  El Artículo 1 define la discriminación contra la mujer como “toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera”.  La CEDAW es importante porque:  **1. Amplía la responsabilidad estatal**. Precisamente porque tiene una perspectiva de género, es el primer instrumento internacional que amplía la responsabilidad estatal a actos que cometen personas privadas, empresas o instituciones no estatales u organizaciones no gubernamentales. Esto es muy importante porque la discriminación contra las mujeres y la violación a sus derechos humanos no sólo se dan en la esfera estatal.  El Artículo 2, inc. (e), establece que los Estados están obligados a tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer practicada por cualesquiera personas, organizaciones o empresas.”  **2. Obliga a los Estados a adoptar medidas concretas para eliminar la discriminación contra las mujeres**. Según el Artículo 2 de CEDAW, los Estados no sólo deben condenar toda forma de discriminación basada en el sexo o género, sino que deben tomar medidas concretas para lograrlo tales como consagrar la igualdad en sus constituciones políticas; abolir las leyes, costumbres, y prácticas que redunden en discriminación contra las mujeres; establecer protecciones jurídicas contra la discriminación; crear mecanismos de denuncia, etc.  **3. Permite medidas transitorias de “acción afirmativa” a las que CEDAW llama medidas especiales de carácter temporal**. Debido al reconocimiento que hace de la histórica desigualdad entre hombres y mujeres en el goce de los derechos humanos, y al hecho de que tratar a personas que se encuentran en situaciones desiguales como si tuvieran el mismo poder no puede redundar en la eliminación de la discriminación, el Artículo 4.1 de la CEDAW establece que los Estados pueden tomar medidas especiales de carácter temporal que aceleren el logro de la igualdad entre los sexos sin que éstas sean interpretadas como discriminatorias para los hombres.  **4. Reconoce el papel de la cultura y las tradiciones en el mantenimiento de la discriminación contra las mujeres y obliga a los Estados a eliminar los estereotipos en los roles de hombres y mujeres**. La CEDAW reconoce el importante papel que juega la cultura, la tradición, la religión, las costumbres y prácticas consuetudinarias o de cualquier otra índole, en la restricción de los derechos de las mujeres. Por consiguiente, prevé que los Estados deben adoptar medidas apropiadas para eliminar los estereotipos y prácticas atingentes a los papeles de hombres y mujeres, que surgen de un concepto de inferioridad o superioridad de un sexo respecto del otro.  **5. Define la discriminación y establece un concepto de igualdad sustantiva**. Todo el contenido de la CEDAW gira alrededor de dos conceptos: la igualdad entre los sexos y la no discriminación contra las mujeres en todas sus formas. En sus “comentarios finales” así como en las Recomendaciones Generales, el Comité de la CEDAW ha ido profundizando y ampliando el significado de la igualdad entre los sexos para incluir a sectores o grupos de mujeres que viven una triple discriminación.  **6. Fortalece el concepto de indivisibilidad de los derechos humanos**. En la CEDAW, aparecen con igual importancia todos los derechos al establecer en un solo instrumento derechos económicos, sociales, culturales, civiles, políticos, así como derechos colectivos de sectores de mujeres y también el derecho al desarrollo. Se ha dicho que además de un documento legal, es una guía para el desarrollo porque sugiere un programa de acción que, de cumplirse, llevaría a los Estados y a la sociedad en general a un plano de desarrollo superior. Esta idea la encontramos en el Preámbulo cuando justifica la igualdad de los sexos como una necesidad social e indispensable para el desarrollo.  Al apreciar que el acto discriminatorio puede producirse en distintas etapas de la existencia de un derecho: en el reconocimiento, el goce o el ejercicio, la CEDAW está obligando a los Estados Parte no sólo a 1) reconocer los derechos de las mujeres, sino a 2) proveer las condiciones materiales y espirituales para que las mujeres puedan gozar de los derechos reconocidos y 3) crear los mecanismos para que las mujeres puedan denunciar su violación y lograr un resarcimiento.  Entre las Observaciones al 9º Informe de México a la CEDAW (2018), destacan las siguientes:  46. De conformidad con la Convención y su recomendación general núm. 34 (2016) sobre los derechos de las mujeres rurales, el Comité recomienda al Estado parte que:  a) Incremente los recursos financieros, humanos y técnicos asignados a la educación y la atención de la salud de las mujeres indígenas y del medio rural, y adopte medidas específicas para garantizar, en la práctica, la igualdad de oportunidades de las mujeres indígenas, las afromexicanas y las mujeres del medio rural en el mercado de trabajo;  b) Amplíe el acceso de las mujeres indígenas y del medio rural a la propiedad y la tenencia de la tierra, entre otros  medios velando por que tengan una representación adecuada en las instancias de decisión sobre el acceso a los ejidos y otros tipos de tierras comunales;  c) Establezca un marco jurídico para regular los proyectos de desarrollo, agroindustriales y empresariales de otro  tipo, y garantizar que solo puedan ejecutarse con el consentimiento libre, previo e informado de las mujeres  indígenas, las afromexicanas y las mujeres del medio rural afectadas y que conlleven el establecimiento de medios de subsistencia alternativos y acuerdos de participación en los beneficios derivados del uso de las tierras y recursos naturales, de conformidad con el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, 1989 (núm. 169) de la OIT;  d) Fortalezca el apoyo institucional para garantizar el acceso de las mujeres indígenas a servicios básicos como el agua y el saneamiento y a oportunidades de empleo, y mejore el reconocimiento y la preservación de sus prácticas culturales tradicionales.  Entre las Recomendaciones que datan de 2012 se tiene:  35. El Comité reitera sus recomendaciones anteriores y exhorta al Estado parte a que:  a) Se asegure de que todos los programas y políticas destinados a eliminar la pobreza incluyan una perspectiva de género y un enfoque intercultural, a fin de eliminar la discriminación contra las mujeres indígenas de las zonas rurales;  b) Adopte medidas especiales de carácter temporal para tener en cuenta las disparidades que enfrentan las mujeres indígenas de las zonas rurales en su acceso a las tierras y la propiedad, y a los servicios sociales básicos, como la educación y la salud, así como su participación en los procesos de adopción de decisiones;  c) Elabore una estrategia general orientada a eliminar las prácticas nocivas que discriminen contra las mujeres indígenas de las zonas rurales, en particular realizando campañas de concienciación dirigidas a las comunidades indígenas en colaboración con la sociedad civil y las organizaciones de mujeres a fin de reforzar una imagen positiva y no estereotipada de la mujer.  44. El Comité recomienda al Estado parte que: […]  d) De conformidad con su recomendación general núm. 37 (2018) sobre las dimensiones de género de la reducción del riesgo de desastres en el contexto del cambio climático, fomente la participación de las mujeres en los procesos de adopción de decisiones y recuperación en casos de desastre en todos los planos, especialmente el local, y siga esforzándose por incorporar una perspectiva de género en todas las políticas de desarrollo sostenible y en la reducción del riesgo de desastres y la gestión posterior a los desastres.  Desde el 2006, se tiene la siguiente Recomendación:  35. El Comité insta al Estado Parte a asegurar que todos los programas y políticas de erradicación de la pobreza traten de manera explícita la naturaleza estructural y las diversas dimensiones de la pobreza y la discriminación a que se enfrentan las mujeres indígenas y las mujeres de zonas rurales.  El Comité pide al Estado Parte que, en su próximo informe periódico, proporcione información detallada sobre las medidas adoptadas y su repercusión, junto con datos desglosados por zonas urbanas y rurales, estados y poblaciones indígenas.  37. El Comité pide al Estado Parte que haga un análisis más completo y use los datos disponibles para determinar tendencias a lo largo del tiempo y los resultados y el efecto de los programas, planes y políticas a todos los niveles, y que asegure que en su próximo informe periódico se incluyan datos desglosados por estados, zonas rurales y urbanas y grupos indígenas, así como su análisis.  Y desde 1998, se tienen las Recomendaciones:  407. El Comité solicita también que la Secretaría de Reforma Agraria siga tratando oficialmente de persuadir a las asambleas de los ejidos de que asignen a las mujeres las parcelas que les corresponden.  421. El Comité pide informaciones sobre las mujeres jefas de empresas rurales y sobre los programas para la promoción económica de las mujeres rurales. |
| ONU Habitat. Declaración de Quito sobre Ciudades y  Asentamientos Humanos  Sostenibles  para todos (2016) | Nuestro ideal común[[1]](#footnote-1)  11. Compartimos el ideal de una ciudad para todos, refiriéndonos a la igualdad en el uso y el disfrute de las ciudades y los asentamientos humanos y buscando promover la inclusividad y garantizar que todos los habitantes, tanto de las generaciones presentes como futuras, sin discriminación de ningún tipo, puedan crear ciudades y asentamientos humanos justos, seguros, sanos, accesibles, asequibles, resilientes y sostenibles y habitar en ellos, a fin de promover la prosperidad y la calidad de vida para todos. Hacemos notar los esfuerzos de algunos gobiernos nacionales y locales para consagrar este ideal, conocido como “el derecho a la ciudad”, en sus leyes, declaraciones políticas y cartas. […]  13. Imaginamos ciudades y asentamientos humanos que:  a) Cumplen su función social, entre ellas la función social y ecológica de la tierra, con miras a lograr progresivamente la plena realización del derecho a una vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado, sin discriminación, el acceso  universal y asequible al agua potable y al saneamiento, así como la igualdad de acceso de todos a los bienes públicos y servicios de calidad en esferas como la seguridad alimentaria y la nutrición, la salud, la educación, las infraestructuras, la movilidad y el transporte, la energía, la calidad del aire y los medios de vida;  b) Alientan la participación, promueven la colaboración cívica, generan un sentimiento de pertenencia y propiedad entre todos sus habitantes, otorgan prioridad a la creación de espacios públicos seguros, inclusivos, accesibles, verdes y de calidad que crean las condiciones  adecuadas para las familias, contribuyen a mejorar la interacción social e intergeneracional, las expresiones culturales y la participación política, según proceda, y fomentan la cohesión social, la inclusión y la seguridad en sociedades pacíficas y pluralistas, donde se satisfacen las necesidades de todos los habitantes, reconociendo las necesidades específicas de aquellos en situaciones de vulnerabilidad;  c) Logran la igualdad de género y empoderan a todas las mujeres y las niñas asegurando la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de derechos en todas las esferas y en los puestos de liderazgo en todos los niveles de adopción de decisiones, garantizando el acceso a un trabajo decente y el principio de igual remuneración por igual trabajo, o trabajo de igual valor, para todas las mujeres y previniendo y eliminando todas las formas de discriminación, violencia y acoso contra las mujeres y las niñas en espacios públicos y privados;  d) Afrontan los desafíos y aprovechan las oportunidades de un crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, presente y futuro, sacando los mejores frutos de la urbanización en aras de la transformación estructural, la alta productividad, las actividades con valor añadido y la eficiencia en el uso de los recursos, aprovechando las economías locales y tomando nota de  la contribución de la economía informal, al tiempo que prestan apoyo a la transición sostenible hacia una economía estructurada;  e) Cumplen sus funciones territoriales más allá de los límites administrativos y actúan como centros e impulsores de un desarrollo urbano y territorial equilibrado, sostenible e integrado a todos los niveles;  f) Promueven la planificación basada en la edad y el género e inversiones para una movilidad urbana sostenible, segura y accesible para todos, así como sistemas de transporte de pasajeros y de carga que hacen un uso eficiente de los recursos y facilitan un vínculo efectivo entre las personas, los lugares, los bienes, los servicios y las oportunidades económicas;[…] |
| Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Belem Do Pará) | Artículo 1. Para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado.  Artículo 2. Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica: […]  b. que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y  c. que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra. |
| Plataforma de Acción de Beijing (1995) | Declaración de objetivos  1. La Plataforma de Acción es un programa encaminado a crear condiciones necesarias para la potenciación del papel de la mujer en la sociedad. […]  34. La incesante degradación del medio ambiente, que afecta a todos los seres humanos, suele tener una repercusión más directa en la mujer. La salud de la mujer y sus condiciones de vida se ven amenazadas por la contaminación y los desechos tóxicos, la deforestación en gran escala, la desertificación, la sequía y el agotamiento de los suelos y de los recursos costeros y marinos, como indica la incidencia cada vez mayor de problemas de salud, e incluso fallecimientos, relacionados con el medio ambiente, que se registran entre las mujeres y las niñas. Las más afectadas son las mujeres que habitan en zonas rurales y las indígenas, cuyas condiciones de vida y subsistencia diaria dependen directamente de ecosistemas sostenibles.  Objetivo estratégico A.1. Revisar, adoptar y mantener políticas macroeconómicas y estrategias de desarrollo que tengan en cuenta las necesidades de las mujeres y apoyen sus esfuerzos por superar la pobreza  Medidas que han de adoptarse  58. Medidas que han de adoptar los gobiernos: […]  m) Facilitar a las mujeres viviendas a precios razonables y el acceso a las tierras, mediante, entre otras cosas, la eliminación de todos los obstáculos que impiden ese acceso, con especial hincapié en la atención de las necesidades de las mujeres, en particular de las que viven en la pobreza y las jefas de familia;  n) Formular y aplicar políticas y programas que proporcionen a las agricultoras y pescadoras (incluidas las agricultoras y productoras de subsistencia, especialmente en las zonas rurales) mejor acceso a servicios financieros, técnicos, de extensión y de comercialización; proporcionar control de las tierras y acceso a ellas e infraestructura y tecnología apropiadas a fin de elevar los ingresos de la mujer y promover la seguridad alimentaria en el hogar, sobre todo en las zonas rurales, y, donde proceda, alentar la creación de cooperativas de mercado pertenecientes a los productores; […]  Objetivo estratégico E.4. Promover la contribución de la mujer al logro de una cultura de paz  Medidas que han de adoptarse  146. Medidas que han de adoptar los gobiernos, las instituciones intergubernamentales internacionales y regionales y las organizaciones no gubernamentales:  a) Promover la solución pacífica de los conflictos y la paz, la reconciliación y la tolerancia mediante la educación, la capacitación, la acción comunitaria y los programas de intercambio de jóvenes, en particular de mujeres;  b) Alentar la realización de investigaciones sobre la paz en que participen mujeres para examinar las repercusiones sobre las mujeres y los niños de los conflictos armados y el carácter y la contribución de la participación de las mujeres en los movimientos de paz nacionales, regionales e internacionales; realizar investigaciones e individualizar mecanismos innovadores para limitar la violencia y solucionar los conflictos, a fin de difundirlos entre el público y para su utilización por mujeres y hombres;[…]  Objetivo estratégico K.1. Lograr la participación activa de la mujer en la adopción de decisiones relativas al medio ambiente en todos los niveles  253. Medidas que han de adoptar los gobiernos, en todos los niveles, con inclusión de las autoridades municipales según proceda:  a) Asegurar oportunidades a las mujeres, inclusive las pertenecientes a poblaciones indígenas, para que participen en la adopción de decisiones relativas al medio ambiente en todos los niveles, incluso como administradoras, elaboradoras de proyectos y planificadoras y como ejecutoras y evaluadoras de los proyectos relativos al medio ambiente;  b) Facilitar y fomentar el acceso de la mujer a la información y la educación, inclusive en las esferas de la ciencia, la tecnología y la economía, promoviendo de ese modo sus conocimientos, aptitudes y oportunidades de participación en las decisiones relativas al medio ambiente;  c) Estimular, con sujeción a las leyes nacionales y de conformidad con el Convenio sobre la Diversidad Biológica, la protección y utilización efectiva de los conocimientos, innovaciones y prácticas de las mujeres de las comunidades indígenas y locales, incluidas las prácticas relativas a las medicinas tradicionales, la diversidad biológica y las tecnologías indígenas, y tratar de asegurar que sean respetados, mantenidos, promovidos y preservados de modo ecológicamente sostenible, y promover su aplicación más amplia con la aprobación y participación de quienes disponen de esos conocimientos; además, salvaguardar los derechos existentes de propiedad intelectual de esas mujeres que se protegen en el derecho nacional e internacional; tratar activamente, cuando sea necesario, de encontrar medios adicionales para proteger y utilizar efectivamente esos conocimientos, innovaciones y prácticas, con sujeción a las leyes nacionales y de conformidad con el Convenio sobre la Diversidad Biológica y el derecho internacional pertinente y alentar la división justa y equitativa de los beneficios obtenidos de la utilización de esos conocimientos, innovaciones y prácticas;  d) Adoptar medidas adecuadas para reducir los riesgos para la mujer resultantes de peligros ambientales identificados, tanto en el hogar como en el trabajo y en otros ambientes, inclusive la aplicación adecuada de tecnologías poco contaminantes, teniendo en cuenta el enfoque preventivo convenido en la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo;  e) Adoptar medidas para integrar una perspectiva de género en el diseño y la utilización, entre otras cosas, de mecanismos de gestión de recursos, técnicas de producción y desarrollo de las infraestructuras en las zonas rurales y urbanas, que sean ecológicamente racionales y sostenibles;  f) Adoptar medidas que reconozcan el papel social de las mujeres como productoras y consumidoras a fin de que puedan adoptar medidas ambientales eficaces, junto con los hombres, en sus hogares, comunidades y lugares de  trabajo;  g) Promover la participación de las comunidades locales, particularmente de las mujeres, en la individualización de las necesidades en materia de servicios públicos, planificación del espacio y diseño y creación de infraestructuras urbanas. […]  254. Medidas que han de adoptar los gobiernos y las organizaciones internacionales y las instituciones del sector privado, según proceda:  d) Establecer estrategias y mecanismos, en particular en los niveles más básicos, para aumentar la proporción de mujeres que participan como dirigentes, planificadoras, administradoras, científicas y asesoras técnicas en el diseño, desarrollo y ejecución de políticas y programas para la ordenación de recursos naturales y la protección y conservación del medio ambiente y que se benefician  de esas actividades;  e) Alentar a las instituciones sociales, económicas, políticas y científicas a que se ocupen del deterioro del medio ambiente y de las repercusiones que ello tiene sobre las mujeres.  Objetivo estratégico K.2. Integrar las preocupaciones y perspectivas de género en las políticas y programas en favor de desarrollo sostenible […]  256. Medidas que han de adoptar los gobiernos:  a) Integrar a las mujeres, incluidas las mujeres indígenas, sus perspectivas y conocimientos, en condiciones de igualdad con los hombres, en la adopción de decisiones en materia de ordenación sostenible de los recursos y en la formulación de políticas y programas de desarrollo sostenible, particularmente los destinados a atender y prevenir la degradación ambiental de la tierra;  b) Evaluar las políticas y programas desde el punto de vista de su repercusión sobre el medio ambiente y de la igualdad de acceso y de utilización por la mujer de los recursos naturales;  c) Asegurar que se realicen investigaciones adecuadas para evaluar de qué modo y en qué medida las mujeres son particularmente susceptibles o están particularmente expuestas al deterioro del medio ambiente y a los peligros  derivados de éste, inclusive, cuando proceda, la realización de investigaciones y la reunión de datos sobre grupos concretos de mujeres, sobre todo mujeres de bajos ingresos, mujeres indígenas y mujeres pertenecientes a minorías;  d) Integrar los conocimientos y las prácticas tradicionales de las mujeres rurales en relación con el uso y la ordenación sostenibles de los recursos cuando se elaboren programas de ordenación del medio ambiente y de divulgación;  e) Integrar los resultados de investigaciones que reflejen la problemática del género en las políticas con el fin de crear asentamientos humanos sostenibles;  f) Promover el conocimiento de la función de las mujeres y fomentar las investigaciones sobre esta función, en particular de las mujeres rurales e indígenas, en la recolección y producción de alimentos, la conservación del suelo, el riego y la ordenación de cuencas hidrográficas, el saneamiento, la ordenación de las zonas costeras y el aprovechamiento de los recursos marinos, el control integrado de las plagas, la planificación del uso de la tierra, la conservación de los bosques y la silvicultura comunitaria, la pesca, la prevención de los desastres naturales y las fuentes de energía nuevas y renovables, prestando especial atención a los conocimientos y a las experiencias de las mujeres indígenas;  g) Elaborar una estrategia de cambio para eliminar todos los obstáculos que impiden la participación plena y equitativa de las mujeres en el desarrollo sostenible y su acceso a los recursos y el control de éstos en un pie de igualdad;  h) Fomentar la educación de las niñas y las mujeres de todas las edades en las esferas de la ciencia, la tecnología, la economía y otras disciplinas relacionadas con el medio ambiente natural, de manera que puedan hacer elecciones bien fundadas y proporcionar información bien fundamentada en la determinación de las prioridades económicas, científicas y ambientales locales para la ordenación y el uso apropiado de los recursos y ecosistemas naturales y locales;  i) Elaborar programas para lograr la participación de mujeres profesionales y científicas, así como de trabajadoras técnicas, administrativas y de oficina, en la  ordenación del medio ambiente, elaborar programas de capacitación de niñas y mujeres en esas esferas, aumentar las oportunidades de contratación y promoción  de las mujeres en esas esferas y poner en práctica medidas especiales encaminadas a promover los conocimientos especializados y la participación de la mujer en dichas actividades;  j) Individualizar y fomentar tecnologías ecológicamente racionales diseñadas, elaboradas y perfeccionadas con la participación de la mujer que sean adecuadas tanto para las mujeres como para los hombres;  k) Apoyar el desarrollo de un acceso equitativo de las mujeres a la infraestructura de vivienda, el agua apta para el consumo y las tecnologías energéticas seguras, tales como la energía eólica y solar, la biomasa y otras fuentes renovables, por medio de la evaluación de las necesidades de participación, la planificación de la energía y la formulación de políticas energéticas a escala local y nacional. |
| Observación No. 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales | El fundamento jurídico del derecho al agua  2. El derecho humano al agua es el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico. Un abastecimiento adecuado de agua salubre es necesario para evitar la muerte por deshidratación, para reducir el riesgo de las enfermedades relacionadas con el agua y para satisfacer las necesidades de consumo y cocina y las necesidades de higiene personal y doméstica. […]  4. El derecho al agua ha sido reconocido en un gran número de documentos internacionales, tales como tratados, declaraciones y otras normas. Por ejemplo, en el párrafo 2 del artículo 14 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer se dispone que los Estados Partes asegurarán a las mujeres el derecho a "gozar de condiciones de vida adecuadas, particularmente en las esferas de [...] el abastecimiento de agua". En el párrafo 2 del artículo 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño se exige a los Estados Partes que luchen contra las enfermedades y la malnutrición mediante "el suministro de alimentos nutritivos adecuados y agua potable salubre". […]  6. El agua es necesaria para diversas finalidades, aparte de los usos personales y domésticos, y para el ejercicio de muchos de los derechos reconocidos en el Pacto. Por ejemplo, el agua es necesaria para producir alimentos (el derecho a una alimentación adecuada) y para asegurar la higiene ambiental (el derecho a la salud). El agua es fundamental para procurarse medios de subsistencia (el derecho a ganarse la vida mediante un trabajo) y para disfrutar de determinadas prácticas culturales (el derecho a participar en la vida cultural). Sin embargo, en la asignación del agua debe concederse prioridad al derecho de utilizarla para fines personales y domésticos. También debe darse prioridad a los recursos hídricos necesarios para evitar el hambre y las enfermedades, así como para cumplir las obligaciones fundamentales que entraña cada uno de los derechos del Pacto. […]  16. Aunque el derecho al agua potable es aplicable a todos, los Estados Partes deben prestar especial atención a las personas y grupos de personas que tradicionalmente han tenido dificultades para ejercer este derecho, en particular las mujeres, los niños, los grupos minoritarios, los pueblos indígenas, los refugiados, los solicitantes de asilo, los desplazados internos, los trabajadores migrantes, los presos y los detenidos. En particular, los Estados Partes deben adoptar medidas para velar por que:  a) No se excluya a las mujeres de los procesos de adopción de decisiones sobre los recursos y los derechos en materia de agua. Es preciso aliviar la carga desproporcionada que recae sobre las mujeres en la obtención de agua.  b) No se impida a los niños ejercer sus derechos humanos por falta de agua potable en las instituciones de enseñanza y los hogares o a causa de la carga que supone la obtención de agua. Es preciso abordar con carácter urgente la cuestión del suministro de agua potable a las instituciones de enseñanza que actualmente carecen de ella.  c) Las zonas rurales y las zonas urbanas desfavorecidas tengan acceso a servicios de suministro de agua en buen estado de conservación. Debe protegerse el acceso a las fuentes tradicionales de agua en las zonas rurales de toda injerencia ilícita y contaminación. Las zonas urbanas desfavorecidas, incluso los asentamientos humanos espontáneos y las personas sin hogar, deben tener acceso a servicios de suministro de agua en buen estado de conservación. No debe denegarse a ningún hogar el derecho al agua por razón de la clasificación de su vivienda o de la tierra en que ésta se encuentra.  d) El acceso de los pueblos indígenas a los recursos de agua en sus tierras ancestrales sea protegido de toda transgresión y contaminación ilícitas. Los Estados deben facilitar recursos para que los pueblos indígenas planifiquen, ejerzan y controlen su acceso al agua.  e) Las comunidades nómadas y errantes tengan acceso al agua potable en sus lugares de acampada tradicionales y designados.  f) Los refugiados, los solicitantes de asilo, los desplazados internos y los repatriados tengan acceso al agua potable tanto si permanecen en campamentos o en las zonas urbanas y rurales. Es preciso otorgar a los refugiados y los solicitantes de asilo el derecho al agua en las mismas condiciones que a los nacionales.  g) Los presos y detenidos tengan agua suficiente y salubre para atender a sus necesidades individuales cotidianas, teniendo en cuenta las prescripciones del derecho internacional humanitario y las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos.  h) Se suministre agua salubre suficiente a los grupos que tienen dificultades físicas para acceder al agua, como las personas de edad, los discapacitados, las víctimas de desastres naturales, las personas que viven en zonas propensas a desastres y las que viven en zonas áridas y semiáridas o en pequeñas islas. |
| Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030 (ODS 5) | 5. a Emprender reformas que otorguen a la mujer el derecho en condiciones de igualdad a los recursos económicos, así como el acceso a la propiedad y al control de la tierra y otros bienes, los servicios financieros, la herencia y los recursos naturales, de conformidad con las leyes nacionales. |
| Agenda Regional de Género | “La Agenda Regional de Género incluye acuerdos sobre los instrumentos y medios para garantizar los derechos y la autonomía de las mujeres y la igualdad de género”. En la Agenda Regional de Género se identifican acuerdos en relación a múltiples dimensiones críticas para la igualdad de género y la autonomía de las mujeres que es posible agrupar en derechos. Una de las cinco, que corresponde a la gestión del territorio es:  E) derechos colectivos y medioambientales (por ejemplo, derecho a la tierra y el territorio, derecho al agua, derecho al desarrollo, cooperación internacional y mitigación y adaptación al cambio climático). |
| Estrategia de Montevideo | Es la estrategia regional para la implementación de la Agenda Regional de Género que implica compromisos asumidos por los Estados, los cuales, a partir del análisis del lenguaje acordado, se pueden agrupar en tres categorías: a) los enfoques que guían las políticas públicas, b) las dimensiones críticas para la igualdad de género y la autonomía de las mujeres tematizadas en derechos, y c) los ejes para la implementación.  a) Los cinco enfoques o perspectivas que guían las políticas públicas y los objetivos vinculados a la autonomía y los derechos de las mujeres son: i) igualdad de género, ii) derechos humanos de las mujeres, iii) interseccionalidad e interculturalidad, iv) democracia paritaria, representativa y participativa, y laicidad, y v) desarrollo sostenible e inclusivo. Estos enfoques actúan de forma interrelacionada, y orientan las medidas de la Estrategia de Montevideo.  b) En la Agenda Regional de Género se identifican los acuerdos para la igualdad de género y la autonomía de las mujeres en relación con múltiples problemáticas que es posible agrupar en dimensiones críticas vinculadas con los derechos humanos, y que, por lo tanto, reconocen a las mujeres como sujetos de derecho y a los Estados como garantes de dichos derechos, a la vez que ratifican su carácter universal, indivisible, inalienable e interdependiente: […]  v) Derechos colectivos y medioambientales con relación a: tierra y territorio; agua y bosques; conocimientos ancestrales; desastres naturales y eventos extremos; cambio climático; ámbitos rural y urbano; gestión de riesgos y mitigación; derecho al desarrollo; cooperación internacional.  c) Los ejes de implementación son: 1) Marco normativo; 2) Institucionalidad; 3) Participación; 4) Construcción y fortalecimiento de capacidades; 5) Financiamiento; 6) Comunicación; 7) Tecnología; 8) Cooperación; 9) Sistemas de información; y 10) Monitoreo, evaluación y rendición de cuentas. |
| XIV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe  (2020) | En esta Conferencia Regional se resumieron los esfuerzos de 40 años en materia de igualdad de género. Uno de los aspectos de mayor interés fue que las desigualdades de América Latina se expresan a nivel del territorio, donde existen profundas brechas de desarrollo entre territorios ricos y territorios pobres.  Esta heterogeneidad territorial es el resultado de “un patrón dispar de asentamiento, acompañado de un gran desequilibrio en la distribución de la riqueza y las oportunidades de bienestar material” (CEPAL, 2016b,  pág. 61) que conlleva un marcado proceso de urbanización producto de la concentración de las oportunidades económicas y socioculturales en zonas urbanas y de “las fuerzas expulsoras desde el ámbito rural, que todavía siguen activas y operan tanto en escenarios de retraso como de modernización productiva” (CEPAL, 2019d, pág. 173). El resultado es que un alto porcentaje de la población —alrededor del 80%— vive en áreas urbanas.  El territorio es uno de los ejes estructurantes de las desigualdades sociales, al tener un peso determinante sobre su magnitud y reproducción en distintos ámbitos del desarrollo social (CEPAL, 2016b, pág. 62). No obstante, al sumarse a la dimensión de género produce situaciones de discriminación y exclusión específicas para las mujeres, ya sea en zonas urbanas o en zonas rurales. Se ha reconocido que mujeres y hombres tienen distintas necesidades, aspiraciones y posibilidades de usar y acceder a los bienes y recursos del espacio que habitan, como consecuencia de la división sexual del trabajo y de los diferentes roles que desempeñan en la esfera privada y en la esfera pública, en el ámbito del trabajo reproductivo y en el ámbito del trabajo productivo (CEPAL, 2016c). Esto determina que el territorio no es neutro desde el punto de vista de género, sino que puede favorecer la exclusión de las mujeres o transformar la situación de desigualdad.  Para considerar la diversidad de los territorios en el análisis de las desigualdades de género hay que adoptar  un enfoque que integre múltiples variables que se entrecruzan y potencian, y es clave articular los enfoques de desarrollo territorial y de género (CEPAL, 2016a, pág. 77). La dimensión territorial puede plasmarse en distintas expresiones de la desigualdad de género para las mujeres que habitan en áreas rurales y urbanas. Si bien el porcentaje de la población que habita en zonas rurales es considerablemente menor que el que habita en zonas urbanas, las mujeres rurales experimentan una situación particular de desigualdad que requiere considerar la dimensión territorial desde el enfoque de género.  Existe una intersección entre los ejes de género y de los territorios rurales, en especial aquellos más apartados. En éstos, los rezagos son más acentuados y hay menores oportunidades para las mujeres. Muchas mujeres que habitan en zonas rurales “están obligadas a permanecer o migrar de sus localidades debido a situaciones de pobreza y violencia”, situación agravada por “la sobrecarga de trabajo doméstico y de cuidados, la baja incidencia en los mercados formales y el limitado acceso a bienes y servicios” (Nobre y otros, 2017, pág. 4).  La situación de las mujeres rurales es también diversa, y esta diversidad puede expresarse tanto por las actividades que desarrollan (agropecuarias, de recolección, de pesca, asalariadas, o incluso actividades no agropecuarias que tienen lugar en el medio rural) como por las interrelaciones culturales y territoriales que las definen (Nobre y otros, 2017). Algunas de las manifestaciones de la desigualdad de género que afecta a las mujeres rurales son la baja participación laboral, el desigual uso del tiempo y los mayores niveles de pobreza.  Un desarrollo rural con enfoque de género debe tener en cuenta las necesidades de las mujeres en su diversidad y en especial tomar en consideración “la información sobre la distribución y asignación del tiempo, además de la identificación de los cambios en el sector, la modernización tecnológica y las necesarias transformaciones socioculturales” (CEPAL, 2017a, pág. 211).  Por otra parte, las mujeres de las zonas urbanas también experimentan situaciones de desigualdad altamente condicionadas por el territorio que habitan. En particular, se ha cuestionado la neutralidad de género del espacio urbano, tanto en su planificación como “respecto de su percepción, uso y simbolización” (Rico y Segovia, 2017, pág. 41), ya que la desigualdad de género también se expresa en las formas de usar y habitar el territorio.  Ejemplo de ello son las agresiones y el acoso en el transporte, problema que afecta principalmente a mujeres adolescentes y jóvenes, estudiantes y trabajadoras de estratos medios y bajos, que usan diariamente los medios de transporte público (Rozas y Arredondo, 2015). Esto tiene consecuencias en la relación de las mujeres con el territorio, ya que, al sentir temor, “abandonan el espacio público, disminuyen su radio de movilidad, utilizan las ofertas de la ciudad con menor frecuencia, cambian sus recorridos y le temen a la ciudad nocturna” (Rico y Segovia, 2017, pág. 56). Las desigualdades urbanas se manifiestan en la concentración de los ingresos, los recursos y las oportunidades en algunos grupos de la población, pero también en términos de la segregación espacial que “en las ciudades latinoamericanas […] se relaciona con una diferencia en el acceso a los servicios y en su calidad” (Scuro y Vaca Trigo, 2017, pág. 130).  Tomado de CEPAL (2020). La autonomía de las mujeres en escenarios económicos cambiantes; XIV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe; Publicación de las Naciones Unidas LC/CRM.14/3; Santiago, 27 a 31 de enero de 2020; Naciones Unidas, 2019 |
| Carta Mundial del Derecho a la Ciudad[[2]](#footnote-2) | Instrumento jurídico no vinculante con la pretensión de convertirse en un instrumento internacional de derechos humanos de la ONU.  Articulo I. Derecho a la ciudad  1. Todas las personas tienen derecho a la ciudad sin discriminaciones de género, edad, condiciones de salud, ingresos, nacionalidad, etnia, condición migratoria, orientación política, religiosa o sexual, así como a preservar la memoria y la identidad cultural en conformidad con los principios y normas que se establecen en esta Carta.  2. El Derecho a la Ciudad es definido como el usufructo equitativo de las ciudades dentro de los principios de sustentabilidad, democracia, equidad y justicia social. Es un derecho colectivo de los habitantes de las ciudades, en especial de los grupos vulnerables y desfavorecidos, que les confiere legitimidad de acción y de organización, basado en sus usos y costumbres, con el objetivo de alcanzar el pleno ejercicio del derecho a la libre autodeterminación y un nivel de vida adecuado. El Derecho a la Ciudad es interdependiente de todos los derechos humanos internacionalmente reconocidos, concebidos integralmente, e incluye, por tanto, todos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales que ya están reglamentados en los tratados internacionales de derechos humanos.  3. Igualdad, no-discriminación:  3.1 Los derechos enunciados en esta Carta deben ser garantizados para todas las personas que habiten en forma permanente o transitoria en las ciudades sin discriminación alguna.  3.2 Las ciudades deben asumir los compromisos adquiridos sobre la implementación de políticas públicas que garanticen la igualdad de oportunidades para las mujeres en las ciudades, expresados en la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación en contra de la Mujer (CEDAW), y en las conferencias de Medio Ambiente (1992), Beijing (1995) y Hábitat II (1996), entre otras. Para ello, se deben asignar los recursos necesarios de los presupuestos gubernamentales para la efectividad de dichas políticas y establecer mecanismos e indicadores cuantitativos y cualitativos para monitorear su cumplimiento en el tiempo.  4. Protección especial de grupos y personas en situación de vulnerabilidad  4.1 Los grupos y personas en situación vulnerable tienen derecho a medidas especiales de protección e integración, de distribución de los recursos, de acceso a los servicios esenciales y de no-discriminación. A los efectos de esta Carta se consideran vulnerables a: personas y grupos en situación de pobreza, en riesgo ambiental (amenazados por desastres naturales), víctimas de violencia, con discapacidad, migrantes forzados, refugiados y todo grupo que, según la realidad de cada ciudad, esté en situación de desventaja respecto al resto de los habitantes. En estos grupos, a su vez, serán objeto prioritario de atención las personas mayores, las mujeres, en especial las jefas de hogar, y los(as) niños(as).  4.2 Las ciudades, mediante políticas de afirmación positiva de los grupos vulnerables, deben suprimir los obstáculos de orden político, económico, social y cultural que limiten la libertad, equidad e igualdad de los(as) ciudadanos(as) e impidan el pleno desarrollo de la persona humana y su efectiva participación política, económica, social y cultural en la ciudad. |

## Legislación Nacional

|  |  |
| --- | --- |
| **Instrumento Jurídico** | **Mandatos** |
| Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos | Principio de Igualdad entre mujeres y hombres (Art. 4°), No discriminación (Art. 1°) y el de Paridad (Art. 41°); también precisa en su Art. 26, literal A: la facultad del “Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática, y los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo”, dentro de los cuales, es central la Perspectiva de Género y el Enfoque de Derechos.  Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.  Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.  Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. […]  Artículo 2º. […] B […]  V. Propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo, mediante el apoyo a los proyectos productivos, la protección de su salud, el otorgamiento de estímulos para favorecer su educación y su participación en la toma de decisiones relacionadas con la vida comunitaria.[…]  C. Esta Constitución reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanas, cualquiera que sea su autodenominación, como parte de la composición pluricultural de la Nación. Tendrán en lo conducente los derechos señalados en los apartados anteriores del presente artículo en los términos que establezcan las leyes, a fin de garantizar su libre determinación, autonomía, desarrollo e inclusión social.  Artículo 4º. […]  Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.  Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.  Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo. |
| Ley de Planeación | Establece en su Artículo 2° los principios constitucionales de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, así como el de la Perspectiva de Género.  También, destaca el artículo 9° que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal deberán planear y definir sus objetivos de desarrollo con perspectiva intercultural y de género a fin de cumplir con la obligación del Estado de garantizar que éste sea equitativo, incluyente, integral, sustentable y sostenible.  Mandatos de transversalización de la PEG en artículos 2 fracciones II, III, IV, VII, 3, 4, 5, 9, 14 fracciones I y II, 16 fracciones IV, V y VIII, 17 fracciones I, II y V, 20, 20 bis, 21, 21 bis, 21 ter, 22, 23, 24, 25, 26, 26 Bis, 28, 33, 34. |
| Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (LGIMH*)* | En sus artículo 5° y 17°, mandata que la Política Nacional en Materia de Igualdad entre mujeres y hombres deberá establecer las acciones conducentes para lograr la igualdad sustantiva en el ámbito, económico, político, social y cultural; y establece que la transversalidad, es el proceso que permite garantizar la incorporación de la Perspectiva de Género con el objetivo de valorar las implicaciones que tiene para las mujeres y los hombres cualquier acción que se programe, tratándose de legislación, políticas públicas, actividades administrativas, económicas y culturales en las instituciones públicas y privadas.  Mandatos de transversalización de la PG en los artículos 5, fracciones I, II, III, IV, V, VI y VII, 9 fracción II, 12 fracciones I, II, III y IV, 17, 34, 35,36, 39, 40, 41, 42, 44. |
| Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) | Mandatos de transversalización de la PG: artículos 1, 2 fracción III Bis, 27 fracción III, 28 fracción V y 111. |
| Ley de Vivienda | Artículo 1o. […]La política nacional y los programas, así como el conjunto de instrumentos y apoyos que señala este ordenamiento, conducirán el desarrollo y promoción de las actividades de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en materia de vivienda, su coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y municipios, y la concertación con los sectores social y privado, a fin de sentar las bases para aspirar a un desarrollo nacional más equitativo, que integre entre sí a los centros de población más desarrollados con los centros de desarrollo productivo, considerando también a los de menor desarrollo, para corregir las disparidades regionales y las inequidades sociales derivadas de un desordenado crecimiento de las zonas urbanas.  ARTÍCULO 3.- Las disposiciones de esta Ley deberán aplicarse bajo principios de equidad e inclusión social de manera que toda persona, sin importar su origen étnico o nacional, el género, la edad, la discapacidad, la condición social o económica, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias o el estado civil pueda ejercer su derecho constitucional a la vivienda. |
| Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano | Artículo 1. […]  I. Fijar las normas básicas e instrumentos de gestión de observancia general, para ordenar el uso del territorio y los Asentamientos Humanos en el país, con pleno respeto a los derechos humanos, así como el cumplimiento de las obligaciones que tiene el Estado para promoverlos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos plenamente; […]  V. Propiciar mecanismos que permitan la participación ciudadana en particular para las mujeres, jóvenes y personas en situación de vulnerabilidad, en los procesos de planeación y gestión del territorio con base en el acceso a información transparente, completa y oportuna, así como la creación de espacios e instrumentos que garanticen la corresponsabilidad del gobierno y la ciudadanía en la formulación, seguimiento y evaluación de la política pública en la materia.  Artículo 2. Todas las personas sin distinción de sexo, raza, etnia, edad, limitación física, orientación sexual, tienen derecho a vivir y disfrutar ciudades y Asentamientos Humanos en condiciones sustentables, resilientes, saludables, productivos, equitativos, justos, incluyentes, democráticos y seguros.  Las actividades que realice el estado mexicano para ordenar el territorio y los Asentamientos Humanos, tiene que realizarse atendiendo el cumplimiento de las condiciones señaladas en el párrafo anterior.  Es obligación del estado, a través de sus diferentes órdenes de gobierno, promover una cultura de corresponsabilidad cívica y social. […]  Artículo 4. La planeación, regulación y gestión de los asentamientos humanos, Centros de Población y la ordenación territorial, deben conducirse en apego a los siguientes principios de política pública:  I. Derecho a la ciudad. Garantizar a todos los habitantes de un Asentamiento Humano o Centros de Población el acceso a la vivienda, infraestructura, equipamiento y servicios básicos, a partir de los derechos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales suscritos por México en la materia;  II. Equidad e inclusión. Garantizar el ejercicio pleno de derechos en condiciones de igualdad, promoviendo la cohesión social a través de medidas que impidan la discriminación, segregación o marginación de individuos o grupos. Promover el respeto de los derechos de los grupos vulnerables, la perspectiva de género y que todos los habitantes puedan decidir entre una oferta diversa de suelo, viviendas, servicios, equipamientos, infraestructura y actividades económicas de acuerdo a sus preferencias, necesidades y capacidades;  III. Derecho a la propiedad urbana. Garantizar los derechos de propiedad inmobiliaria con la intención de que los propietarios tengan protegidos sus derechos, pero también asuman responsabilidades específicas con el estado y con la sociedad, respetando los derechos y límites previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta Ley. El interés público prevalecerá en la ocupación y aprovechamiento del territorio; […] |
| Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente | Artículo 1. I.- Garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano para su desarrollo, salud y bienestar;  ARTÍCULO 7o.- Corresponden a los Estados, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y las leyes  locales en la materia, las siguientes facultades:  XIV.- La conducción de la política estatal de información y difusión en materia ambiental;  XV.- La promoción de la participación de la sociedad en materia ambiental, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley; |

## Legislación Estatal

|  |  |
| --- | --- |
| **Instrumento Jurídico** | **Mandatos** |
| Ley Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres | Artículo 6. Corresponde al Estado promover y garantizar la igualdad de trato y oportunidades para las mujeres y hombres, niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad, sin discriminación alguna por razón de género, edad, estado civil, embarazo, raza, procedencia étnica, religión, orientación sexual, discapacidad o estado de salud; desarrollando políticas, planes, programas y proyectos para tal fin.  Artículo 7. Corresponde al Estado adoptar medidas especiales de carácter temporal orientadas a acelerar la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, garantizándose de esta manera lo dispuesto en la presente Ley.  Artículo 13. El principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres permeará con carácter transversal, en la actuación de todos los Poderes Públicos del Estado, organismos públicos descentralizados y municipios. Estos integrarán dicho principio en la adopción y ejecución de sus disposiciones normativas, en la definición y presupuestación de sus políticas públicas destinadas a hacer efectivo el derecho a la igualdad, a la no discriminación y el respeto a la dignidad humana.  Artículo 24. Con el fin de hacer efectivo el derecho constitucional de la igualdad, los Poderes Públicos del Estado de Jalisco, adoptarán los siguientes criterios generales de actuación:  I. Adoptar la perspectiva de género en las políticas, decisiones y acciones a implementar;  II. El compromiso con la efectividad del derecho constitucional de la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres y la no discriminación;  IX. Promover, siempre que sea posible, la adopción de indicadores de género en la producción de estadísticas de los organismos e instituciones públicas y privadas.  CAPÍTULO SÉPTIMO DEL SECTOR RURAL  Artículo 57. A fin de hacer efectiva la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en el sector agrario, el Poder Ejecutivo del Estado, en coordinación con los organismos públicos auxiliares de la Administración Pública Estatal, promoverá el acceso de las mujeres a la propiedad o tenencia de la tierra y al crédito agrario, la asistencia técnica, la capacitación y la tecnología agropecuaria, para su adecuada explotación.  Así mismo, desarrollará acciones para mejorar el nivel educativo y de formación de las mujeres y hombres, y especialmente, aquellas que promuevan nuevas actividades laborales que favorezcan la incorporación de las mujeres en el mercado de trabajo.  CAPÍTULO OCTAVO DEL ACCESO A LA VIVIENDA  Artículo 58. Los Poderes Públicos del Estado de Jalisco desarrollarán, en el ámbito de su competencia, en materia de acceso a la vivienda, medidas destinadas a hacer efectivo el principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres.  Así mismo, deberán incluir en sus políticas públicas acciones destinadas a fomentar el acceso a la vivienda de las mujeres en situación de necesidad o en riesgo de exclusión, y de las que hayan sido víctimas de la violencia de género, en especial cuando, en ambos casos, tengan hijos menores a su cargo.  CAPÍTULO NOVENO DEL DESARROLLO URBANO  Artículo 59. Las políticas públicas en materia de desarrollo urbano tomarán en consideración las necesidades de los distintos grupos sociales y de los diversos tipos de estructuras familiares, y favorecerán el acceso en condiciones de igualdad de mujeres y hombres a los distintos servicios e infraestructuras urbanas.  Artículo 60. El diseño y la ejecución de las políticas públicas urbanas tendrán en cuenta la perspectiva de género, utilizando para ello, especialmente, mecanismos e instrumentos que fomenten y favorezcan la participación ciudadana y la transparencia. |
| *Ley de Planeación Participativa* *para el Estado de Jalisco y sus Municipios* | Artículo 4. La planeación participativa para el desarrollo estará orientada por los siguientes principios:  I. Atención a las necesidades prioritarias de la población: a través del diseño e implementación de políticas públicas, que tienen como objetivo el combate a la pobreza, la desigualdad; exclusión social y la cultura de paz, buscando el desarrollo de habilidades, destrezas y capacidades que empoderen a las personas al incluirse en la toma de decisiones para la planeación participativa y desarrollo del Estado.  X. Equidad de género: como la provisión equitativa de bienes y servicios de alto valor social para hombres y mujeres, de conformidad con lo establecido en la Ley Estatal para la Igualdad entre Hombres y Mujeres; así como la transversalidad de acciones al interior de las dependencias que integran los municipios, el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como los órganos y autónomos estatales, para reconocer e incorporar la atención de necesidades específicas en materia de género, la no discriminación y la no violencia contra las mujeres;  XIII. Respeto irrestricto de los Derechos Humanos y Sociales: como garantes del respeto a la dignidad de la persona; |
| Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco | Art 1, párrafo segundo: Los entes públicos obligados a cumplir las disposiciones de esta Ley deberán observar que la administración de los recursos públicos del estado se realice con base en los criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y perspectiva de género.  Art 5, fracción V. El gasto público deberá ejercerse con criterios de perspectiva de género.  Art 18. Los poderes Legislativo y Judicial, así como los organismos públicos autónomos, al formular sus respectivos proyectos de presupuesto, lo harán cumpliendo con los principios de equilibrio, sostenibilidad financiera, responsabilidad hacendada, legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas, disciplina presupuestal, motivación, certeza, equidad, proporcionalidad y perspectiva de género, atendiendo en todo momento las previsiones del ingreso y prioridades del Estado, quienes deberán enviar dichos proyectos al titular del Poder Ejecutivo en la fecha señalada por el artículo 29 de esta Ley, para su consideración en inclusión en la iniciativa de presupuesto de egresos del Estado.  Art 29. Para la formulación del proyecto de presupuesto de egresos del Gobierno del Estado, las dependencias y entidades elaborarán sus anteproyectos con base en los programas respectivos, ajustándose a los criterios generales de responsabilidad hacendaria y financiera establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, así como a los principios de racionalidad, austeridad, disciplina presupuestal, motivación, certeza, equidad, proporcionalidad y perspectiva de género, a la ley y a los montos que establezca el titular del Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaría, remitiéndolos, en el caso de las Dependencias, directamente a la Secretaría, a más tardar el 15 de agosto de cada año. Por lo que respecta a las entidades sectorizadas, éstas lo harán por conducto y con la validación de la dependencia coordinadora del sector correspondiente, en el mismo plazo.  Art 33. Los organismos descentralizados del Poder Ejecutivo aprobarán por conducto de sus propios órganos de gobierno sus respectivos presupuestos de egresos, cumpliendo con los criterios generales de responsabilidad hacendaria y financiera establecidos la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, así como principios de racionalidad, austeridad, disciplina presupuestal, motivación, certeza, equidad, proporcionalidad, y perspectiva de género, con apego a lo establecido en la presente ley.  Art 107. La Secretaría y la Contraloría del Estado, en el ámbito de sus respectivas competencias, verificarán periódicamente, al menos cada trimestre, los resultados de recaudación y de ejecución de los programas y presupuestos de las dependencias, con base en las reglas y recomendaciones que emita la Secretaría a través del Sistema de Evaluación del Desempeño del estado de Jalisco, entre otros, para identificar la eficiencia, economía, eficacia, y la calidad en la Administración Pública y el impacto social del ejercicio del gasto público, así como aplicar las medidas conducentes.  Dicho Sistema de Evaluación del Desempeño a que se refiere el párrafo anterior del presente artículo será obligatorio para los ejecutores de gasto, e incorporará indicadores para evaluar los resultados presentados en los informes trimestrales, desglosados por mes, enfatizando en la calidad de los bienes y servicios públicos, la satisfacción del ciudadano y el cumplimiento de los criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y perspectiva de género.  Art 117. Los documentos dirigidos a la ciudadanía, en los términos del presente Título, además de cumplir lo señalado en el artículo 116, deberán contener lo siguiente: […]  Las previsiones del gasto destinado a programas vinculados con políticas para la atención de niños, niñas y adolescentes, a la mitigación de los efectos del cambio climático y de la equidad de género; |
| Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco | Art 25. 1.- Las facultades de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres son las siguientes:  […]  V. Asegurar, en coordinación con las demás dependencias y entidades de la administración pública estatal, la incorporación estratégica y transversal de la perspectiva de género y de los derechos humanos de las mujeres en el plan estatal de desarrollo, el presupuesto de egresos del estado y el sistema estatal de desempeño, así como en todas las políticas y programas sectoriales del Estado, desde un enfoque interseccional, intercultural, intergeneracional e intersectorial; […]  XXVI. Asegurar, en coordinación con las Secretarías General de Gobierno y de Planeación y Participación Ciudadana, la incorporación de los ejes transversales de derechos humanos de las mujeres, la perspectiva de género dentro de los instrumentos de planeación, programas y políticas del Gobierno del Estado; […]  XI. Dar seguimiento y evaluar la implementación y los resultados del eje transversal de los derechos humanos de las mujeres en el plan estatal de desarrollo, el presupuesto de egresos, las políticas y programas sectoriales del estado, así como en el Sistema Estatal de Desempeño, mediante un sistema estatal de indicadores para la igualdad entre mujeres y hombres;  XII. Dar seguimiento y evaluar las asignaciones presupuestarias estatales y su aplicación para asegurar las políticas transversales y sectoriales de igualdad de género y derechos humanos de las mujeres;  XIII. Implementar un sistema estatal para dar seguimiento a la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y asegurar un presupuesto suficiente, progresivo e intransferible para ese fin; […]  XXVII. Promover, en coordinación con las Secretarías General de Gobierno, de la Hacienda Pública y de Planeación y Participación Ciudadana, la creación de un fondo estatal para el fomento de actividades de incidencia social, entre otras, para el apoyo y fortalecimiento a las organizaciones civiles de mujeres, feministas y defensoras de derechos humanos, mujeres jóvenes, mujeres migrantes, mujeres adultas mayores, mujeres con discapacidad, de la diversidad sexual y mujeres indígenas, tomando en consideración los aportes de la sociedad civil desde la perspectiva de la progresividad de los derechos humanos de las mujeres;  […]  XLIII. Proponer lineamientos para que las dependencias y entidades estatales y municipales transparenten y rindan informes periódicos con indicadores de género sobre el ejercicio de los recursos asignados y ejercidos, de conformidad a sus capacidades como sujetos obligados y en el ámbito de sus respectivas competencias;  XLIV. Generar un sistema de información que facilite el seguimiento y monitoreo de las políticas de igualdad y que permitan evaluar su impacto y resultados. |

# Diagnóstico

Para una adecuada gestión de la tierra y el territorio, se requiere a la brevedad visibilizar un conjunto de brechas de género, que den cuenta del **acceso, uso y control** entre mujeres y hombres, de los recursos ambientales, de infraestructura y movilidad, debido a que la práctica inexistencia de estadísticas desagregadas y la ausencia de perspectiva de género en los análisis de planeación regional, implican que en esta materia, las políticas públicas disten aún de ser incluyentes. Lo anterior, a pesar de que dicha perspectiva es transversal en todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible y debe estar inscrita en todos los programas de desarrollo rural y urbano, así como en toda política pública medio ambiental.

Es primordial darse a la tarea institucional de recopilar información para mejorar el conocimiento del fenómeno de la desigualdad y su expresión en los espacios urbanos y rurales, dado que su carencia restringe la eficacia de una política integral que valore la forma en que los mandatos de género en los roles, tiempos, traslados, cargas de trabajo y necesidades específicas repercuten en las oportunidades regionales y personales de desarrollo.

Las niñas y mujeres enfrentan en general mayores desventajas, para el disfrute y uso de los espacios públicos, en la propiedad de los activos patrimoniales y en el control de los recursos económicos, culturales y naturales, todo lo cual impacta en las condiciones, tiempos y movimientos que marcan la vida cotidiana tanto para la producción como para la reproducción social, y que siempre se ven de manera desarticulada por parte de las políticas públicas. Sobre todo, cuando se trata de mujeres pobres, con discapacidad, indígenas, afromexicanas, adolescentes o mayores de edad o lesbianas.

Las doce regiones de Jalisco disponen de sus respectivos planes, mismos que identifican los principales problemas y vocacionamientos en cada una de ellas. Sin embargo, ésta tarea omitió considerar un análisis de *Género en el Desarrollo*, que haga explícitas las condiciones, situaciones y relaciones de poder entre mujeres y hombres, así como las repercusiones que éstas tienen en las posibilidades de desarrollo de las personas y de las capacidades colectivas en su conjunto.

En la *Agenda Estratégica para el Desarrollo Regional de Jalisco* se muestra de manera resumida, la problemática regional, pero también se omite una mirada desde la óptica transversal de género y de derechos humanos. Por ello, se tiene un área de mejora que subsanar, si se quieren alcanzar las metas de desarrollo regional de manera incluyente, interseccional y territorial. (Ver anexo)

Debe llamarse la atención al dato adicional de que de los 15 indicadores clave para nuevas administraciones de la plataforma *Cambio Climático Cómo Vamos Jalisco*, no existe uno solo vinculado a derechos humanos o a la perspectiva de género e interseccional.[[3]](#footnote-3) Lo anterior a pesar de existir la Resolución 58/217 de la Asamblea General de las Naciones Unidas donde se hizo un llamado a ocuparse más a fondo de la ejecución de los programas y proyectos relativos al agua, “y que al mismo tiempo se trate de asegurar la participación e intervención de la mujer en las medidas de desarrollo relacionadas con el agua”. (Mujer y Medio Ambiente A.C., 2008, pág. 18)

Considerar las condiciones socioeconómicas y las relaciones de poder entre mujeres y hombres, tanto en el plano urbano como rural, es necesario para las políticas públicas que están en la ruta de enfrentar el cambio climático, la desertificación, la sobreexplotación y contaminación de acuíferos, y la pérdida de la biodiversidad, toda vez que el género es una categoría de análisis que contribuye a comprender la forma en que los seres humanos se vinculan con la naturaleza a partir de visibilizar sus valores, creencias, interpretaciones y prácticas específicas. La desigualdad de género es una de las causas estructurales de la pobreza y el desorden de los asentamientos humanos afecta primordialmente a las mujeres, tanto en su carga de trabajo, en su seguridad y posibilidades de desarrollo. (Mujer y Medio Ambiente A.C., 2008, pág. 12)

Más de la mitad del territorio jalisciense está compuesto por miles de localidades que conforman ejidos y comunidades en donde habitan más de 8.1 millones de sujetos agrarios (5.9 millones son hombres y 2.2 millones son mujeres). Se tiene un conjunto de Brechas de género que no están particularmente estudiadas y de las que no se dispone de datos desagregados por sexo que den cuenta del uso de los recursos naturales como la energía y el agua entre otros, es decir, de los bienes comunales o ejidales[[4]](#footnote-4).

Cabe recordar que dentro de los núcleos agrarios, las personas ejidatarias y comuneras son aquellas con más derechos conforme a lo que su respectiva *Asamblea de delimitación, destino y asignación de tierras*, decida en cuanto al destino de las tierras, parcelamiento económico o de hecho, regularización de la tenencia de los posesionarios o de quienes carezcan de los certificados correspondientes. Es en estas asambleas[[5]](#footnote-5) donde se determina el destino de los terrenos al asentamiento humano, al uso común o al área parcelada a favor de los ejidatarios, comuneros, posesionarios y avecindados; pero desafortunadamente no existen datos sistematizados que permitan conocer la participación que tienen las mujeres en dichas instancias a nivel estatal.

Fuente: Registro Agrario Nacional. Total de Sujetos por Calidad Agraria. 07/04/2020

En cuanto a personas ejidatarias, se observa que Jalisco ocupa el 11° lugar a nivel nacional en esta brecha entre 28,065 mujeres y los 87,917 hombres con esta condición (una diferencia de 59, 852 personas). Está por debajo del valor nacional (73.21 por ciento) con una brecha del 68.08 por ciento, en una realidad en la que sólo dos entidades (CDMX y Baja California) favorecen más la presencia de ejidatarias.

Fuente: Registro Agrario Nacional. Total de Sujetos por Calidad Agraria. 07/04/2020

En cambio, Jalisco (69.82 por ciento) supera el promedio nacional (68.02 por ciento), y ocupa el quinto lugar, en lo que se refiere a la Brecha de género de las personas posesionarias. Esto señala que es una de las entidades en donde las mujeres rurales encuentran más desventaja para hacer uso de la tierra. Existe una diferencia de 16, 712 personas, entre 7,223 mujeres y 23,935 hombres.

La situación se muestra un poco más equitativa en el caso de las comuneras, donde Jalisco muestra una Brecha de género de 52.28 por ciento. Se tienen 4,464 mujeres y 9,354 hombres. Cabe recordar que la brecha de género se elimina cuando tiene un valor de cero.

Fuente: Registro Agrario Nacional. Total de Sujetos por Calidad Agraria. 07/04/2020

Por último, se tiene la situación de las personas con calidad de avecindadas[[6]](#footnote-6) en donde la CDMX y Jalisco encabezan la lista nacional. La Brecha de género de Jalisco adquiere un valor del 75 por ciento respecto a un promedio nacional del 64 por ciento. 1,604 mujeres y 6,439 hombres hacen una diferencia de 4,835 personas.

Fuente: Registro Agrario Nacional. Total de Sujetos por Calidad Agraria. 07/04/2020

En lo que respecta a los espacios urbanos, las ciudades son igualmente diseñadas obedeciendo la división sexual de prácticas, tiempos y actividades, además de que la relación con el medio ambiente es mucho más agresiva por la industrialización que se alberga y la carencia de agua en zonas populares refleja la desigualdad social de manera cotidiana.

Debido a la construcción social de género, el espacio público es identificado con lo masculino, mientras que el espacio privado con lo femenino. También con base en los roles de género, las actividades que realizan los hombres asociadas a su papel como proveedores y las asignadas a las mujeres, como cuidadoras de sus familias, hacen que las desigualdades para el ejercicio del derecho a la ciudad estén más limitadas para ellas.

Se requiere también generar y sistematizar información que dé cuenta de las Brechas de género en el uso de los espacios públicos, en el uso del tiempo, las diferencias en el modo y número de trayectos que hacen hombres y mujeres y las dificultades para la movilidad en las urbes, la percepción de miedo e inseguridad debido a los peligros asociados con la agresión sexual o física contra las mujeres como son acoso callejero, violación, etcétera, y que atentan contra su derecho a una vida libre de violencia en el ámbito público.

El desigual uso de los espacios públicos impide que las mujeres accedan libremente al territorio y lo hagan suyo, transitando en las ciudades como foráneas en sus propias colonias y barrios. La restricción del ejercicio del derecho a la ciudad conlleva al menoscabo de otros derechos como la libertad para circular al lugar deseado y en el horario de preferencia, a poder aprovechar las oportunidades de desarrollo que se presenten en horarios poco seguros para las mujeres, quienes, finalmente, ven restringida su autonomía al depender, nuevamente, de un hombre, ya sea el padre, hermano, hijo o pareja para poder hacer uso del espacio público.

Respecto a las diferencias en la movilidad y el número de traslados que hacen las mujeres al día en virtud de su doble y triple jornada, es muy probable que sea mucho mayor al de los hombres, que en su mayoría, hacen trayectos lineales, de su casa al lugar de trabajo y de regreso. Por la división sexual del trabajo, las mujeres hacen más trayectos cortos para cumplir con sus responsabilidades, gastando más tiempo, energía y más recursos económicos en su movilidad.

Un claro indicador de los privilegios de género (y por contar con mayores ingresos), radica en que son los hombres los que más disponen de transporte particular que las mujeres. La siguiente gráfica muestra la magnitud de las brechas de género en accidentes de tránsito cometidos por mujeres y hombres.

Con los datos más recientes se tiene, por ejemplo, que en 2018, mientras los hombres fueron responsables de 189 muertes por accidentes de tráfico, las mujeres lo fueron en 23 casos. Si se considera la variable del total de heridos en accidentes, se tiene una diferencia de 10 veces más; los hombres estuvieron involucrados en 4, 475 casos, en tanto que las mujeres lo estuvieron en 463 situaciones en este mismo año.

Fuente: Elaborado con información del IIEG, con base en INEGI Estadísticas de accidentes de tránsito terrestre en zonas urbanas y suburbanas 2010-2018

Respecto a la Brecha de género en el uso del tiempo libre, tenemos que las mujeres mexicanas utilizan 26.5 horas para el cuidado de la familia y los hijos frente a 14 horas que los hombres utilizan para las mismas actividades. Los hombres sólo dedican un tiempo parecido (11 horas) al de las mujeres (13.3 horas), cuando se encuentran solteros (ENUT 2015). Todo esto ha implicado un menor uso y disfrute de la ciudad.

La seguridad es otro factor central para el uso y disfrute del territorio, que se ve condicionado por la percepción existente, limitando el ejercicio de las mujeres a transitar. De acuerdo con el PEGD, “Jalisco ocupó en 2011 y 2016 el tercer lugar en lo referente al porcentaje de mujeres violentadas en espacios públicos, solo después de la Ciudad de México y el Estado de México, donde la violencia comunitaria de índole sexual superó a la media nacional. En este sentido, algunos de los espacios donde la población se siente más insegura, con el 69.0 por ciento es el transporte público, y la calle con el 62.8 por ciento”.

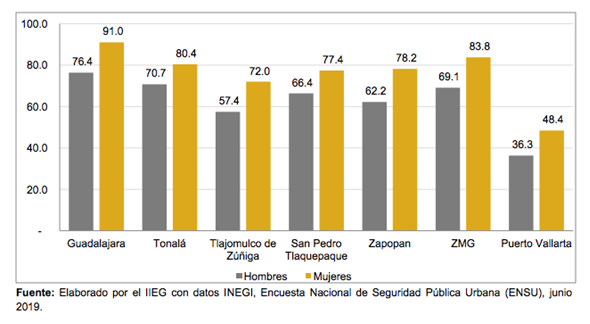
La percepción de inseguridad se muestra de manera diferenciada para las mujeres y para los hombres, y afecta el alcance de las decisiones que ellas toman, debido a que dicha inseguridad puede obstaculizar o potenciar su autonomía, movilidad y desarrollo de manera integral.

En este sentido, la Brecha de género en la percepción de inseguridad prevalece para conocer cómo las mujeres viven las ciudades cotidianamente y a nivel territorial cómo es que ello les permite ejercer sus derechos humanos.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana (ENSU) que realizó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) entre abril y junio de 2018, ocho de cada 10 personas habitantes del municipio de Guadalajara se sienten inseguras. De este mismo informe presentado por el INEGI en julio de 2019 destaca que en la Zona Metropolitana de Guadalajara las mujeres (83.8%) perciben mayor inseguridad que los hombres (69.1%).

La percepción de mayor inseguridad de las mujeres se mantuvo en todos los municipios que integran la ZMG. Zapopan es el municipio con la mayor diferencia porcentual sobre la percepción de inseguridad (mujeres, 78.2% y hombres, 62.2%) seguido de Guadalajara (mujeres, 91% y hombres, 76.4%), Tlajomulco de Zúñiga (mujeres, 72% y hombres, 57.4%), San Pedro Tlaquepaque (mujeres, 77.4% y hombres, 66.4%) y Tonalá (mujeres, 80.4% y hombres, 70.7%). En Puerto Vallarta, el 36.3% de los hombres y el 48.4 por ciento de las mujeres consideran insegura su ciudad. Ver siguiente gráfica.

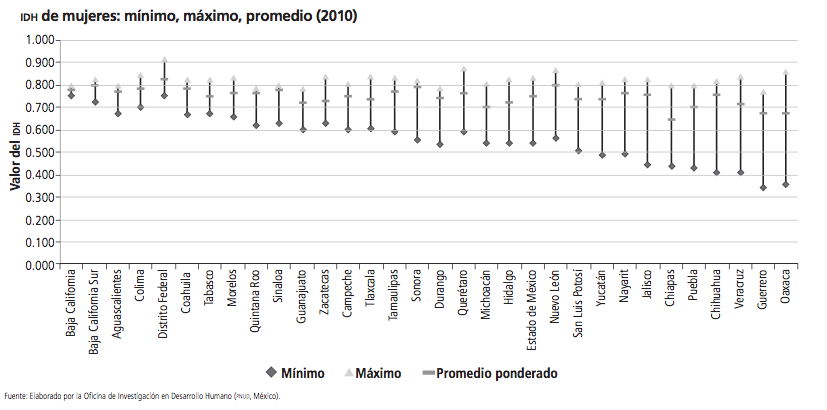
Gráfica 6. Porcentaje de la Población de 18 años y más que considera insegura su ciudad, por sexo.



Otra forma de valorar dónde se ubica Jalisco regionalmente es mediante el Índice de Desarrollo Humano que integra los aspectos de salud, educación e ingreso de acuerdo con lo planteado por el Programa de Desarrollo de Naciones Unidas (PNUD).

En los últimos años, los datos se desagregan por sexo para permitir una comparación entre mujeres y hombres. Y los estudios se han ido descentralizando para comparar entre las entidades federativas, las mayores brechas de género que se presentan (PNUD, 2014).

Gráfica 7. Índice de Desarrollo Humano de mujeres: mínimo, máximo, promedio (2010)

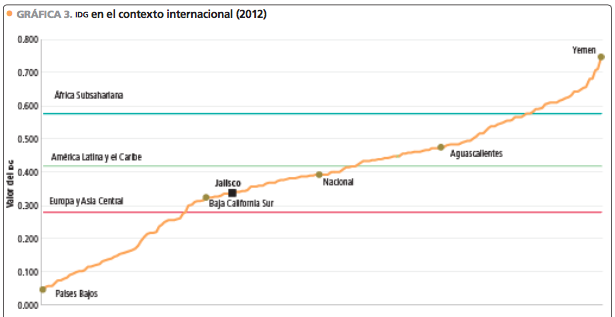


En esta tabla podemos observar que Jalisco presenta una de las mayores brechas a nivel nacional de acuerdo con el IDH después de Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Chihuahua, Puebla y Chiapas que son los estados con mayor desigualdad y desarrollo económico del país.

Por su parte el Índice de Desigualdad de Género (IDG) se enfoca en los sectores de salud reproductiva, empoderamiento y mercado laboral de acuerdo con lo planteado por el Programa de Desarrollo de Naciones Unidas (PNUD). Este Índice refleja la desventaja de las mujeres respecto de los hombres en esas dimensiones. Por otro lado también se dispone del Índice de Potenciación de Género (IPG) relativo a conocer la participación política y económica de las mujeres.

Igual que el IDH, el IDG tiene un valor cercano a cero cuando el panorama de desarrollo es igualitario, y se aproxima a uno cuando las desventajas de las mujeres frente a los hombres son amplias.

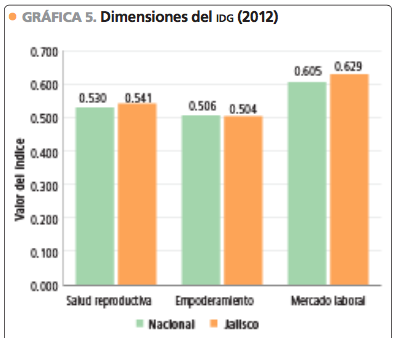
Gráfica 8. Índice de Desigualdad de Género (IDG) en el contexto internacional (2012)



Fuente: PNUD 2014.

En el caso de Jalisco, dentro del contexto nacional e internacional de acuerdo con los datos proporcionados por PNUD tomando como línea base el 2012 (PNUD, 2014), la desigualdad entre hombres y mujeres de Jalisco es menor al promedio nacional (0.393) y a países de América Latina y el Caribe.

Gráfica 9. Dimensiones del IDG (2012)



Fuente: PNUD 2014.

De acuerdo con el mismo estudio (PNUD, 2014) en cada una de las dimensiones del IDG para Jalisco, los niveles se encuentran cercanos al nivel nacional pero en ninguna dimensión es menor al 0.504, lo que indica que las brechas de género son altas.

En una recapitulación en términos de brechas disponibles y aquellas que mínimamente se necesitan generar a la brevedad en esta materia, se tiene la siguiente tabla:

|  |  |
| --- | --- |
| Brechas de Género y/o indicadores de acceso a oportunidades | |
| Disponibles | Requeridas |
| Brecha de género de personas ejidatarias  Brecha de género de personas comuneras  Brecha de género de personas posesionarias  Brecha de género de personas avecindadas | Brecha de género en Propiedad de la Tierra  Brecha de género en Propiedad de Ganado[[7]](#footnote-7)  Porcentaje de mujeres ejidatarias y comuneras en cargos directivos  Porcentaje de mujeres en puestos vecinales de toma de decisión.  Brecha de género en acceso a Agua de Riego |
| Brechas de género por accidentes de tráfico | Brechas de género en el uso de los espacios públicos. [[8]](#footnote-8) |
| Brecha de género en el uso del tiempo libre | Tiempo de mujeres y hombres en actividades productivas, reproductivas y de trabajo comunitario |
| Brecha de género en la percepción de inseguridad  Porcentaje de la Población de 18 años y más que considera insegura su ciudad | Modo de transporte y número de trayectos |
| Índice de Desarrollo Humano de mujeres  Índice de Desigualdad de Género |  |
|  | Brecha de género en equipamiento urbano (por ejemplo bicis públicas, espacios reservados en transporte, horarios nocturnos, etc)  Brecha de género en acceso a equipamiento para actividades productivas  Brecha de género de acceso a Infraestructura (accesibilidad a carretera pavimentada, que ya se tiene en los estudios sociodemográficos del IIEG pero hay que desagregar por sexo). |
|  | Porcentaje de Apoyos Económicos por sexo y tamaño de proyecto. |
|  | Denuncias ambientales presentadas, en proceso y resueltas positivamente, según sexo |
|  | Porcentaje de personas que recuperaron su patrimonio en eventos de Desastres naturales según sexo. |

No omite recordarse que los indicadores a elaborar deberán cubrir los tres aspectos de mayor interés para el análisis: acceso, uso y control de los recursos para la gestión de los territorios desde una perspectiva de género.

# Objetivos, estrategias e indicadores DE PROIGUALDAD

**Objetivo 4 del PROIGUALDAD JALISCO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objetivo 4: Desarrollar medidas de planeación multiescalar con perspectiva de género que aseguren una orientación del territorio y los espacios públicos, urbanos y rurales, a cerrar las Brechas de Género, así como a un hábitat y ciudades seguras para las mujeres y hombres** | | | | | |
| **Estrategia 4.1** Vincular la Política Estatal para la Igualdad de Género a los doce planes regionales y con cada uno de los Proyectos Estratégicos Regionales del PEGD | | | | | |
| Línea de Acción | Línea Base | Meta Sexenal | Indicadores | Instituciones Responsables | |
| Implementación | Medio de Verificación |
| 4.1.1 Elaborar un análisis de las doce regiones del territorio estatal vinculado a las Brechas e indicadores de género |  |  | Diagnóstico Situacional del Territorio con Perspectiva de Género, Interseccional, Intercultural y Derechos Humanos por región | Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial | Informes anuales |
| Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres | 12 Documentos de análisis |
| Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco | 12 Documentos de análisis |
| 4.1.2 Analizar las posibilidades, riesgos e impacto de género de los Proyectos Estratégicos Regionales |  |  | Diagnóstico Situacional con Perspectiva de Género, Interseccional, Intercultural y Derechos Humanos por Proyecto Estratégico Regional | Secretaría de Gestión Integral del Agua | Informes anuales |
| Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres | 12 Documentos de análisis |
| Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas | 12 Documentos de análisis |
| Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial | Informes anuales |
|
| 4.1.3 Atender las medidas de igualdad de género de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación. |  |  | Reporte Interinstitucional | Secretaría de Desarrollo Económico. | Informes anuales |
| Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial | Informes anuales |
|
| **Estrategia 4.2** Promover el acceso de las mujeres a la propiedad de tierra, agua, tecnología e información de mercados, para fines de aprovechamiento ecológico | | | | | |
| 4.2.1 Promover el acceso de las mujeres rurales a bienes inmuebles, agua, ganado mayor y servicios financieros |  |  | Porcentaje de créditos específicos para mujeres rurales | Secretaría de Desarrollo Económico. | Informes anuales |
| Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial | Informes anuales |
| Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | Informes anuales |
| 4.2.2 Impulsar la participación de las mujeres rurales en los programas de producción de alimentos |  |  | Número y monto per cápita a cooperativas de mujeres rurales | Secretaría de Desarrollo Económico. | Informes anuales |
| Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | Informes anuales |
| Asistencia técnica |
| 4.2.3 Realizar estudios, investigaciones e indicadores que permitan determinar los aportes de las mujeres en el manejo y gestión hídrica local, regional y estatal |  |  | Diagnóstico de Género en sustentabilidad y saneamiento de cuerpos de agua por municipio y región | Secretaría de Desarrollo Económico. | Informes anuales |
| Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial | Informes anuales |
| Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco | Informes anuales |
| Secretaría de Gestión Integral del Agua | Informes anuales |
| 4.2.4 Desarrollar proyectos dirigidos a grupos de mujeres, que impulsen y financien alternativas para el acceso a agua de calidad y para el manejo sustentable de los recursos hídricos a nivel de microcuencas, comunidades y hogares. |  |  | Número de proyectos por microcuenca y región | Secretaría de Desarrollo Económico. | Informes anuales |
| Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial | Informes anuales |
| Secretaría de Gestión Integral del Agua | Informes anuales |
| 4.2.5 Diseñar programas de educación y de manejo integral de residuos que incorporen la perspectiva de género y de consumo responsable a nivel municipal. |  |  | Número de acciones comunitarias dirigidas por mujeres | Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial | Informes anuales |
| Secretaría de Gestión Integral del Agua | Informes anuales |
| Secretaría de Educación Pública Jalisco | Informes anuales |
| 4.2.6 Desarrollar programas que impulsen la participación de las mujeres y su autonomía en el usufructo de la tierra mediante proyectos de manejo, conservación y restauración de suelos en regiones indígenas, con vulnerabilidad a sequías y alto grado de erosión. |  |  | Número de acciones comunitarias dirigidas por mujeres | Secretaría de Desarrollo Económico. | Informes anuales |
| Secretaría de Gestión Integral del Agua | Informes anuales |
| Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | Informes anuales |
| 4.2.7 Desarrollar cadenas de producción agroecológicas innocuas en mediana y pequeña escalas, que generen alternativas de desarrollo comunitario y de seguridad alimentaria para mujeres de regiones con alta migración, vulnerabilidad a la sequía y pobreza extrema. |  |  | Número de cadenas comunitarias dirigidas por mujeres | Secretaría de Desarrollo Económico. | Informes anuales |
| Secretaría de Gestión Integral del Agua | Informes anuales |
| Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | Informes anuales |
| Secretaria del Sistema de Asistencia Social. | Informes anuales |
| **Estrategia 4.3** Formar capacidades que impulsen el conocimiento, la gestión y el liderazgo de las mujeres en proyectos educativos ambientales comunitarios tanto rurales como urbanos | | | | | |
| 4.3.1 Desarrollar estrategias de comunicación educativa sobre cambio climático y gestión de riesgos dirigido a mujeres rurales, mujeres indígenas y grupos de mujeres en condiciones de riesgo ambiental. |  |  | Número de acciones comunitarias dirigidas por mujeres | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | Informes anuales |
| Secretaria del Sistema de Asistencia Social. | Informes anuales |
| Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial | Informes anuales |
| 4.3.2 Hacer un diagnóstico situacional con información estadística, de las mujeres rurales y su relación con el medio ambiente y su usufructo de los recursos naturales, a partir del cual se elabore una Agenda puntual. |  |  | Diagnóstico de Género y Medio Ambiente por región | Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial | Informes anuales |
| Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco | Informes anuales |
| Secretaria del Sistema de Asistencia Social. | Informes anuales |
| 4.3.3 Impulsar la participación activa de las mujeres en las políticas y acciones de prevención y contención de desastres naturales, así como en las instancias de desarrollo ambiental y rural. |  |  | Porcentaje de participación de mujeres en comités de prevención | Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial | Informes anuales |
| Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | Informes anuales |
|
| 4.3.4 Garantizar la participación de las mujeres rurales en el Comité Estatal de Acción frente al Cambio Climático y en los organismos municipales correspondientes. |  |  | Porcentaje de mujeres en el Comité Estatal de Acción frente al Cambio Climático | Secretaria del Sistema de Asistencia Social. | Informes anuales |
| Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial | Informes anuales |
| Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | Informes anuales |
| 4.3.5 Desarrollar las capacidades de las mujeres para la elaboración y ejecución de proyectos que les permitan aprovechar los programas de apoyo en materia de medio ambiente, desarrollo rural, aprovechamiento de recursos naturales y desarrollo socioambiental. |  |  | Porcentaje de mujeres capacitadas por región y municipio | Secretaría de Desarrollo Económico. | Informes anuales |
| Secretaría General del Gobierno | Informes anuales |
| Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial | Informes anuales |
| 4.3.6 Promover la organización y encuentros de mujeres que realizan proyectos ambientales, de conservación y manejo de recursos naturales y de desarrollo comunitario sustentable. |  |  | Número de Encuentros Regionales | Secretaría de Desarrollo Económico. | Informes anuales |
| Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial | Informes anuales |
| Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | Informes anuales |
| **Estrategia 4.4** Recuperar desde una perspectiva de género los espacios públicos y medios de transporte para hábitat y ciudades seguras | | | | | |
| 4.4.1 Eliminar estereotipos sexistas y/o misóginos en los mensajes o anuncios de publicidad. |  |  | Protocolo | Secretaría General del Gobierno | Informes anuales |
|
|
| 4.4.2 Elaborar diagnósticos multidimensionales y regionales centrados en las experiencias de las mujeres sobre la accesibilidad, uso, valoración y preferencias de los espacios públicos |  |  | Diagnóstico y mapas de percepción, uso, riesgos, movilidad urbana y de necesidades específicas para distintos grupos de mujeres en municipios urbanos y rurales | Secretaría de Seguridad | Informes anuales |
| Secretaría General de Gobierno | Informes anuales |
| Secretaría de Transporte | Informes anuales |
| 4.4.3 Capacitar a las mujeres en sus colonias para la elaboración de programas de recuperación de espacios públicos |  |  | Número de programas de recuperación de espacios públicos | Secretaría de Seguridad | Informes anuales |
| Secretaría General de Gobierno | Informes anuales |
| Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial | Informes anuales |
| 4.4.4 Asegurar que todas las obras públicas incorporen un estudio de impacto social |  |  | Porcentaje de obras públicas que cuentan con estudio de impacto social | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | Informes anuales |
| Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial | Informes anuales |
| Secretaría de Transporte | Informes anuales |
| 4.4.5 Establecer una adecuada señalización, cámaras, avisos y botones de pánico en el transporte público |  |  | Número de contactos con respuesta efectiva | Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial | Informes anuales |
| Secretaría de Transporte | Informes anuales |
| Secretaría de Seguridad | Informes anuales |
| 4.4.6 Promover la conformación de redes ciudadanas de resguardo y protección |  |  | Número de redes ciudadanas | Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial | Informes anuales |
| Secretaría de Transporte | Informes anuales |
| Secretaría de Seguridad | Informes anuales |

# ANEXO





# Aportaciones

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sección** | **Observaciones** | **Sugerencias** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

# Comentarios

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

# Bibliografía

Atlas de Género 2019. Recuperado en: <http://gaia.inegi.org.mx/atlas_genero/>

Asociación de Mujeres por el Aprendizaje de sus Derechos, el Desarrollo, y la Paz (Women’s Learning Partnership WLP) (s.f.). *Liderazgo para la toma de decisiones. Manual de entrenamiento en liderazgo para mujeres*. Recuperado en:

<http://www.learningpartnership.org/docs/spanishltcmanual.pdf>

AWID (2004*). “Interseccionalidad: una herramienta para la justicia de género y la justicia económica”,* AWID (Asociación para los Derechos de la Mujer y el Desarrollo), *Derechos de las mujeres y cambio económico* No. 9. Recuperado en: <https://www.awid.org/es/publicaciones/interseccionalidad-una-herramienta-para-la-justicia-de-genero-y-la-justicia-economica>.

Banco Interamericano de Desarrollo (BID). (2017). Transport Gender Lab. Recuperado en: https://tglab.iadb.org/estado-de-jalisco.

BID (s.f.). *Marco conceptual y operativo del Programa de Servicios Integrados para el Empoderamiento de la Mujer*, Plenus. Recuperado en:

<https://www.publications.iadb.org/es/marco-conceptual-y-operativo-del-programa-de-servicios-integrados-para-el-empoderamiento-de-la>-mujer.pdf

Benavente, María Cristina (2014). *Políticas públicas para la Igualdad de Género, Un aporte a la autonomía de las mujeres*. Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL, 2014. Recuperado en:

<http://www.repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37226/S1420372_es.pdf>

Cámara de Diputados. Congreso de la Unión. *Ley de Planeación*. Recuperado en:

<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/59_160218.pdf>

*Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación*, Recuperado en: <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/262_210618.pdf>

*Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia.* Recuperado en: <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV_220617.pdf>

*Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres*. Recuperado en:

<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIMH_240316.pdf>

*Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes*. Recuperado en:

<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDNNA_171019.pdf>

*Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.* http://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Ciga/agenda/DOFsr/148.pdf

CEAMEG (2013). *Desigualdades de Género que Inciden en la Condición y Posición de las Mujeres en México: Ámbito Laboral, Capacitación, Remuneración, Educación, Acceso al Crédito y a la Propiedad-Vivienda*, Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género CEAMEG, LXII Legislatura, Cámara de Diputados. Recuperado en:

<http://www.archivos.diputados.gob.mx/Centros_Estudio/ceameg/ET_2013/17_DGICP.pdf>

CEDAW. (1979). Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Recuperado en: http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/ sconvention.htm

CEPAL (1999). *Indicadores de Género para el seguimiento y la evaluación del Programa de Acción Regional para las Mujeres de América Latina y el Caribe, 1995-2001 y la Plataforma de Acción de Beijing*. Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL, Recuperado en:

<http://www.repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/31242/S9900661_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y>º

CEPAL (2006). *Guía asistencia técnica para la producción y el uso de indicadores de género*. Recuperado en:

<http://www.repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/31960/S2006362_es.pdf?sequence=1>

CEPAL (2018). *Guía Metodológica, Planificación para la implementación de la Agenda 2030 en América Latina y el Caribe*, Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL, División de Publicaciones y Servicios Web, 2018. Recuperado en:

<https://www.cepal.org/es/publicaciones/43963-guia-metodologica-planificacion-la-implementacion-la-agenda-2030-america-latina>

CEPAL-ONU Mujeres (s.f.). *Matriz de análisis para la identificación de políticas justas de igualdad de género*, Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL, Observatorio de Igualdad de Género. Recuperado en:

<http://www.oig.cepal.org/sites/default/files/2012829_matriz_de_analisis_espanol_web.pdf>

CEPAL (2019). *Planes de igualdad de género en América Latina y el Caribe Mapas de ruta para el desarrollo*, Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL, Observatorio de Igualdad de Género en América Latina y el Caribe, Estudios 1. Recuperado en

<https://www.cepal.org/es/publicaciones/41014-planes-igualdad-genero-america-latina-caribe-mapas-ruta-desarrollo>

CEPAL (2019). *Planificación para el desarrollo territorial sostenible en América Latina y el Caribe*, Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL. Recuperado en:

<https://www.cepal.org/es/publicaciones/44731-planificacion-desarrollo-territorial-sostenible-america-latina-caribe>

CEPAL-ECLAC. (2002). *Vulnerabilidad Sociodemográfica: viejos y nuevos riesgos para comunidades, hogares y personas*. Brasilia, Brasil. ONU. LC/R.2086.

CEDAW (1979). *Convención sobre Todas las formas de Discriminación contra la Mujer*. Recuperado en:

[http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechospor ciento20Humanos/D35.pdf](http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/D35.pdf)

CEDHJ (2018). *Informe Especial sobre las Políticas Públicas Municipales para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Estado de Jalisco,* marzo 2018. Recuperado en:

<http://cedhj.org.mx/recomendaciones/inf.%20especiales/2018/INFORME%20ESPECIAL_30marzo2018.pdf>

Comisión de Mujeres y Desarrollo. El proceso de empoderamiento de las mujeres. Guía metodológica, París, Junio de 2007. Recuperado en:

<http://www.dhls.hegoa.ehu.eus/uploads/resources/4668/resource_files/proceso_empoderamiento_mujeres_CFD.pdf>

CONAVIM (2010). *Del dicho al hecho. Análisis y evaluación de la política de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia en México (2000-2009)*. Recuperado en:

<https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/79578/Del_Dicho_al_Hecho_Completo.pdf>

Congreso del Estado de Jalisco. [*Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Jalisco*.](https://congresoweb.congresojal.gob.mx/BibliotecaVirtual/legislacion/Leyes/Ley%20de%20Acceso%20de%20las%20Mujeres%20a%20una%20Vida%20Libre%20de%20Violencia%20del%20Estado%20de%20Jalisco.doc)

[*Ley de Planeación Participativa para el Estado de Jalisco y sus Municipios*.](https://congresoweb.congresojal.gob.mx/BibliotecaVirtual/legislacion/Leyes/Ley%20de%20Planeaci%C3%B3n%20Participativa%20para%20el%20Estado%20de%20Jalisco%20y%20sus%20Municipios.doc)

|  |  |
| --- | --- |
|  | [*Ley del Sistema de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza del Estado de Jalisco*.](https://congresoweb.congresojal.gob.mx/BibliotecaVirtual/legislacion/Leyes/Ley%20del%20Sistema%20de%20Participacion%20Ciudadana%20y%20Popular%20para%20la%20Gobernanza%20del%20Estado%20de%20Jalisco.doc) |

[*Ley Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres*.](https://congresoweb.congresojal.gob.mx/BibliotecaVirtual/legislacion/Leyes/Ley%20Estatal%20para%20la%20Igualdad%20entre%20Mujeres%20y%20Hombres.doc)

[*Ley Estatal para Promover la Igualdad, Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de Jalisco*.](https://congresoweb.congresojal.gob.mx/BibliotecaVirtual/legislacion/Leyes/Ley%20Estatal%20para%20Promover%20la%20Igualdad,%20Prevenir%20y%20Eliminar%20la%20Discriminaci%C3%B3n%20en%20el%20Estado%20de%20Jalisco.doc)

[*Ley para la Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar del Estado de Jalisco*.](https://congresoweb.congresojal.gob.mx/BibliotecaVirtual/legislacion/Leyes/Ley%20para%20la%20Prevenci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20de%20la%20Violencia%20Intrafamiliar%20del%20Estado%20de%20Jalisco.doc)

Recuperadas en:

<https://www.congresoweb.congresojal.gob.mx/BibliotecaVirtual/busquedasleyes/Listado.cfm#Leyes>

De la Cruz, Carmen (1998). *Guía metodológica para integrar la perspectiva de género en proyectos y programas de desarrollo*. España: Emakunde/Instituto Vasco de la Mujer. Recuperado en:

<http://www.emakunde.euskadi.eus/u72publicac/es/contenidos/informacion/pub_guias/es_emakunde/adjuntos/guia_genero_es.pdf>

Demetriades, J. (2009). *Género y gobernanza, Colección de recursos de apoyo*, Institute of Development Studies, Bridge, Reino Unido. Recuperado en:

http:// [www.dhl.hegoa.ehu.esficheros00000596Genero\_gobernanza.pdf](http://www.dhl.hegoa.ehu.esficheros00000596Genero_gobernanza.pdf)

Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) 2018. Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI). Recuperado en: <https://www.inegi.org.mx/programas/ensu/>

Facio, Alda, (s.f.) *La Igualdad Sustantiva un Paradigma Emergente en la Ciencia Jurídica*. Recuperado en:

[http://www.centreantigona.uab.cat/docs/articulos/Lapor ciento20igualdadpor ciento20substantiva.por ciento20Unpor ciento20paradigmapor ciento20emergentepor ciento20enpor ciento20lapor ciento20cienciapor ciento20jurpor cientoC3por cientoADdica.pdf](http://www.centreantigona.uab.cat/docs/articulos/La%20igualdad%20substantiva.%20Un%20paradigma%20emergente%20en%20la%20ciencia%20jur%C3%ADdica.pdf)

Foro Social Mundial. *Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad*. Revista Paz y Conflictos, Número 5, año 2012. https://www.ugr.es/~revpaz/documentacion/rpc\_n5\_2012\_doc1.pdf

García-Prince, Evangelina (2008). *Políticas de igualdad, equidad y gender mainstreaming ¿De qué estamos hablando? Marco conceptual*. Edición revisada y actualizada. España: Àgencia Catalana de Cooperació al Desenvelupament y Fondo España-PNUD. Recuperado en:

<http://www.pmayobre.webs.uvigo.es/descargar_libros/evangelina_garcia_price/politicas.pdf>

Gayle Rubin (s.f.), *Reflexionando sobre el sexo: notas para una teoría radical de la sexualidad*, Biblioteca Virtual de Ciencias Sociales. Recuperado en: <https://www.museo-etnografico.com/pdf/puntodefuga/150121gaylerubin.pdf>

Gobierno del Estado de Jalisco (2020). Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana. Índice de Institucionalización de la Perspectiva de Género en la Administración Pública Estatal. Recuperado en: <https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide>

--------- (s.f.) Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas. *Agenda estratégica para el desarrollo regional de Jalisco. Síntesis de los planes regionales de desarrollo Jalisco 2015-2025*. . Recuperado en: http://seplan.app.jalisco.gob.mx/biblioteca

Guzmán, Virginia (2003). *Gobernabilidad democrática y género, una articulación posible*. Recuperado en:

<http://www.repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5911/S038566_es.pdf;jsessionid=D5AF99CBD87749101457AE95D1029FE9?sequence=1>

Guzmán, Virginia (2001). *La institucionalidad de género en el estado: Nuevas perspectivas de análisis*, CEPAL. Recuperado en:

<http://www.repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5878/S01030269_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Hofbauer, H., Sánchez, D., Zebadúa, V, Pérez, L., Rangel, R. (2006). *Presupuestos sensibles al género: Conceptos y elementos básicos. Guía para la elaboración de Presupuestos Públicos con enfoque de género, en el sector salud.* México: Fondo de las Naciones Unidas para la Mujer. Recuperado en:

<http://www.inmujer.gob.es/publicacioneselectronicas/documentacion/Documentos/DE099.pdf>

INEGI. *Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana* (ENSU) 2018. Recuperado en: <https://www.inegi.org.mx/programas/ensu/>

*Atlas de Género 2019*, Recuperado en:

<http://www.gaia.inegi.org.mx/atlas_genero/>

INMUJERES. *Avances y desafíos de la igualdad de género. A veinte años de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing*. Cuaderno de trabajo No. 61. Recuperado en: <http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/99985/ct61.pdf>

INMUJERES. *Género y sustentabilidad: Reporte de la situación actual*. Mujer y Medio Ambiente, A.C., México, 2008.

INMUJERES. *Monitoreo de la Política Nacional para la Igualdad en los tres Poderes y Órdenes de gobierno*. Cuaderno de trabajo No. 33. Recuperado en:

<http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/27493/ct33.pdf>

INMUJERES. ¿Qué es el sexismo? Recuperado en: http://puntogenero.inmujeres.gob.mx/ Portal/madig/sexismo/

INMUJERES-ONU-Mujeres (2014). *Presupuestos con perspectiva de género en el nivel federal y estatal en México*, No. 2, septiembre 2014. Recuperado en:

[http://www.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2015/budgetspor ciento20withpor ciento20apor ciento20genderpor ciento20perspectivepor ciento20atpor ciento20federalpor ciento20andpor ciento20statepor ciento20levelspor ciento20inpor ciento20mexico.pdf?v=1&d=20150127T224546](http://www.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2015/budgets%20with%20a%20gender%20perspective%20at%20federal%20and%20state%20levels%20in%20mexico.pdf?v=1&d=20150127T224546)

INMUJERES y Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (2014). *Referentes conceptuales y metodológicos sobre presupuestos con perspectiva de género*. México: Inmujeres y ONU Mujeres. Recuperado en:

<http://www.unwomen.org//media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2015/conceptual-references-budgets-with-a-gender-perspective.pdf?la=es&vs=1124>

INMUJERES-ONU-Mujeres (2014). Referentes conceptuales de los presupuestos con perspectiva de género, No. 1, septiembre 2014. Recuperado en: <http://www.unwomen.org/es/digital-library/publications/2015/01/conceptual-references-budgets-with-a-gender-perspective>OEA (1994). *Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra la mujer* "Convención de Belém Do Pará”. Recuperado en:

[http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechospor ciento20Humanos/D9.pdf](http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/D9.pdf)

Lombardo, Emanuela. El Mainstreaming de Género en la Unión Europea. Publicado en Aequalitas. Revista Jurídica de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, vol. 10-15, Mayo-Diciembre 2003, pp. 6-11. Recuperado en:

<https://www.researchgate.net/publication/228601519_El_mainstreaming_de_genero_en_la_Union_Europea/link/542acd9e0cf277d58e89f938/download>

Montoya, Ana (2011). *Las Mujeres y su Derecho a la Ciudad: Una mirada a su goce y reconocimiento en el Distrito Cultural y Turístico de Cartagena de Indias-Colombia*. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales FLACSO, Programa Regional de Formación en Género y Políticas Públicas. Argentina. http://prigepp.org/pdf/12102401181013.pdf

ONU. Comisión de la condición jurídica y social de la mujer. Recuperado en: <http://www.dhl.hegoa.ehu.es/ficheros/0000/0251/proceso_empoderamiento_mujeres_CFD.pdf>

ONU. (1995). *Declaración y Plataforma de Acción de Beijing*. Recuperado en:

[http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfApor ciento20S.pdf](http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20S.pdf)

ONU (2017). *Nueva Agenda Urbana*. Declaración de Quito sobre Ciudades y Asentamientos Humanos Sostenibles para Todos y Plan de aplicación de Quito para la Nueva Agenda Urbana. Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible HABITAT III. http://habitat3.org/wp-content/uploads/NUA-Spanish.pdf

ONU. Informe sobre indicadores para vigilar el cumplimiento de los instrumentos internacionales de derechos humanos, 2008. Recuperado en <https://www2.ohchr.org/english/issues/indicators/docs/HRI.MC.2008.3_sp.pdf>

ONU. Indicadores de Derechos Humanos. Guía para la edición y la aplicación. 2012. Recuperado en:

<https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Human_rights_indicators_sp.pdf>

ONUMUJERES. Gobernanza y planificación nacional. Recuperado en:

<https://www.unwomen.org/es/what-we-do/governance-and-national-planning>

OPS. Marco conceptual para la transverzalización de la perspectiva género en salud. Recuperado en:

<https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2014/PETGS-Brochure.pdf>

Programa Sectorial de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano 2013-2018 (PSDATU 2013-2018.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (2014). Los Indicadores de Desarrollo Humano y Género en México: nueva metodología. Ed. PNUD, México.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (2015). Guía de Herramientas en sensibilidad de género para las Comunicaciones Nacionales. https://www.undp.org/content/dam/undp/library/gender/general/Gender%20Responsive%20National%20Communications%20Toolkit\_SPA.pdf

Sandoval, Carlos (2015). *La planificación participativa para lograr un cambio estructural con igualdad Las estrategias de participación ciudadana en los procesos de planificación multiescalar*, Manuales CEPAL, 2015. <https://www.repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/39055/7/S1501278_es.pdf>

Scott, Joan. *El género: una categoría útil para el análisis histórico*, Recuperado en: [https://www.fundacionhenrydunant.org/images/stories/biblioteca/derechos\_economicos\_sociales\_culturales\_genero/Elpor ciento20Generopor ciento20Unapor ciento20Categoriapor ciento20Utilpor ciento20parapor ciento20elpor ciento20Analisispor ciento20Historico.pdf](https://www.fundacionhenrydunant.org/images/stories/biblioteca/derechos_economicos_sociales_culturales_genero/El%20Genero%20Una%20Categoria%20Util%20para%20el%20Analisis%20Historico.pdf)

SHCP (s.f.). *Introducción a la Gestión para Resultados (GpR), Presupuesto basado en Resultados (PbR) y Sistema de Evaluación del Desempeño (SED),* Unidad de Evaluación del Desempeño. Recuperado en:

[http:/www./transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/introduccion\_PbR\_SED.pdf](http://transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/introduccion_PbR_SED.pdf)

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (2019). Información sobre violencia contra las mujeres. Incidencia delictiva y llamadas de emergencia 9-1-1. Centro Nacional de Información. “2.4 Incidentes de acoso u hostigamiento sexual”. Información con corte al 30 de noviembre de 2019. Recuperado en: https://lasillarotarm.blob.core.windows.net.optimalcdn.com/docs/2019/12/29/infodelictviolenciacontralasmujeresnov19.pdf

Sojo, Carlos(2002). “La noción de ciudadanía en el debate latinoamericano”, *En Revista* de la CEPAL, No. 76, disponible en:

<https://www.repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/10799/076025038_es.pdf;jsessionid=A4C25553706B4A7A4CD1D7031598F997?sequence=1>

Srilatha Batliwala y Alexandra Pittman (2010). *Captando el cambio en la realidad de las mujeres, Una mirada crítica a los marcos y enfoques actuales de monitoreo y evaluación*. AWID. Diciembre 2010. Recuperado en:

<http://www.awid.org/sites/default/files/atoms/files/captando_el_cambio_en_la_realidad_de_las_mujeres.pdf>

1. http://habitat3.org/wp-content/uploads/NUA-Spanish.pdf [↑](#footnote-ref-1)
2. https://www.ugr.es/~revpaz/documentacion/rpc\_n5\_2012\_doc1.pdf [↑](#footnote-ref-2)
3. http://jaliscocomovamos.org/cambio-climatico-como-vamos [↑](#footnote-ref-3)
4. Bienes comunales. Se llama así al conjunto de tierras, bosques y aguas, patrimonio de los núcleos de población que de hecho o por derecho guardan el estado comunal. Este régimen de propiedad se caracteriza porque la titularidad de dichos bienes corresponde a la comunidad; su aprovechamiento es derecho de todos los miembros de manera colectiva, a menos que la propia asamblea decida asignar porciones de terreno en forma individual.

   Bienes ejidales. Son las tierras, bosques y aguas concedidas mediante resolución presidencial, sentencia del Tribunal Superior Agrario o mediante la aportación de terrenos para la constitución de nuevos ejidos, con las modalidades y regulaciones que prevé la ley en la materia. Los bienes ejidales son susceptibles de uso y aprovechamiento de manera individualizada, de acuerdo con la propia resolución o sentencia, o de conformidad a las decisiones tomadas por la asamblea del núcleo. [↑](#footnote-ref-4)
5. http://pa.gob.mx/publica/Glosario/Glosario.pdf [↑](#footnote-ref-5)
6. **Avecindado**. Mexicano (sic), mayor de edad, que haya residido por un año o más en las tierras del ejido y que haya sido reconocido con ese carácter por la asamblea del núcleo o por el tribunal agrario competente.

   Los avecindados tendrán derecho, en su caso, a la asignación de derechos sobre tierras ejidales; a participar en la venta de los derechos correspondientes cuando no exista sucesor del sujeto agrario; a adquirir derechos parcelarios por enajenación; al derecho del tanto en la primera enajenación de parcelas con dominio pleno, y a ser integrantes de la junta de pobladores. http://pa.gob.mx/publica/Glosario/Glosario.pdf [↑](#footnote-ref-6)
7. Debe considerarse que es común que el tipo de animales que poseen las mujeres, sobre todo rurales, son aves, conejos o especies de menor tamaño; mientras que el ganado caprino, vacuno o porcino es propiedad de los hombres. [↑](#footnote-ref-7)
8. Aquí se recomienda considerar el Índice de Ciudades Seguras que combina 57 indicadores cuantitativos y cualitativos. Las ciudades de Jalisco no están consideradas. https://imco.org.mx/indice-de-ciudades-seguras-2019-via-the-economist/ [↑](#footnote-ref-8)